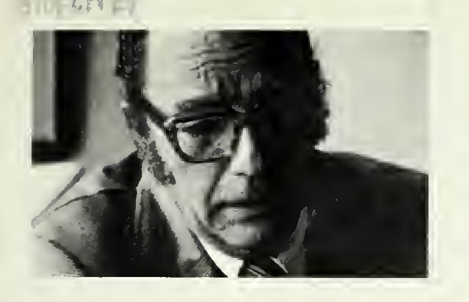


Félix Luna

Golpes militares y salidas electorales



Editorial Sudamericana

GOLPES MILITARES Y SALIDAS ELECTORALES

FELIX LUNA

Golpes militares y salidas electorales

EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES

IMPRESO EN LA ARGENTINA

ISBN 950-07-0151-0

A fines del año pasado, un semanario de Buenos Aires pidió al autor de estas líneas una serie de notas sobre los golpes militares en la Argentina. Fueron publicadas en enero y febrero de 1983 y alguna utilidad habrán tenido para recordar la manera y circunstancias en que fueron derrocados casi todos los gobiernos constitucionales que existieron en el país desde 1930.

Terminada esta serie, parecía conveniente concertarla con otra que tuviera como tema las salidas electorales de los gobiernos de facto. *Sin estos nuevos capítulos, los anteriores hubieran quedado incompletos. Pues si la historia de los golpes militares daba una idea de la responsabilidad de los hombres de armas en las caídas de nuestra democracia, faltaba señalar el papel que también jugaron los civiles en la asombrosa y desalentadora debilidad de nuestra arquitectura institucional. En marzo y abril aparecieron, pues, en la misma revista, las secuencias de este nuevo* racconto *histórico.*

Aquí están las doce notas, tal cual salieron; el único cambio es el orden en que se presentan ahora, que mezcla los materiales de las dos series para hacer el relato más comprensible. Tal vez el conjunto sea provechoso en este año que asistirá a una nueva reconstrucción institucional que esperamos sea la última. Entre otras cosas, demuestra que las revoluciones solucionaron poco las

situaciones que pretendieron enmendar; que generalmente desembocaron en salidas insatisfactorias, generando nuevas debilidades en los poderes de jure. *También evidencian la compartida responsabilidad de militares y civiles en la progresiva degradación de nuestra democracia, que hacia 1930 era imperfecta pero promisoria y llena de lozanía.*

En suma, estas páginas son una lección para todos. También para el autor, un hombre voluntariamente alejado de la política partidaria que nunca ha dejado de pensar en su país a partir de la reflexión histórica, el territorio donde más cómodo se siente por vocación, y desde el cual comparte con sus compatriotas los aleccionadores avatares del último medio siglo argentino.

Abril de 1983

I

1930: EL GOLPE MILITAR

A las cinco y media de la tarde, un anciano salía de una casa del barrio de Constitución y entraba trabajosamente en un automóvil abierto. Alguien le echó encima de los hombros un sobretodo; una mujer alcanzó a llenar uno de los bolsillos del abrigo con frascos de remedios y cajas de comprimidos. Le alcanzaron un ponchito de vicuña que el anciano, con gesto cansado, puso sobre sus piernas. Dos o tres personas se acomodaron en los asientos. Todos estaban serios y callados. El automóvil arrancó, seguido de otro vehículo con algunos hombres que no disimulaban su aire de policías. Los dos automóviles enfilaron por la calle Brasil hacia el Bajo y luego giraron a la derecha. A veinte cuadras de allí, una columna militar estaba llegando a la Plaza de Mayo, en medio de la creciente aclamación de un público entusiasta.

Hipólito Yrigoyen iniciaba un camino que no lo traería de vuelta a Buenos Aires hasta un año y medio más tarde, después de un penoso confinamiento en la isla Martín García. Era el primer presidente constitucional derrocado por una revolución triunfante, esa tarde del 6 de setiembre de 1930.

Gobierno jaqueado

"Nosotros (los conservadores) sobrellevamos el peso de un error tremendo. Nosotros contribuimos a reabrir, en 1930, la era de los cuartelazos victoriosos. El año 1930, para salvar al país del desorden y el desgobierno, no necesitamos sacar las tropas de los cuarteles... Pudimos, dentro de la ley, resolver la crisis. No lo hicimos [...] por precipitación, por incontinencia partidaria, por sensualidad de poder. Y ahora está sufriendo el país las consecuencias de este precedente funesto" (José Aguirre Cámara, ante el Comité Nacional del Partido Demócrata Nacional, el 31 de julio de 1946).

"Yo recuerdo que el presidente Yrigoyen fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo, el primero que enfrentó a las fuerzas nacionales y extranjeras de la oligarquía para defender a su pueblo. Y lo he visto caer ignominiosamente por la calumnia y los rumores. En esa época yo era un joven y estaba contra Yrigoyen porque hasta mí habían llegado los rumores y no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad." (Juan D. Perón, el 9 de abril de 1953.)

En los primeros años posteriores a 1930, quienes fueron partícipes de la revolución solían recordar la fecha con diversos actos; la última vez fue en 1943, y no por equivocación, el gobierno *de facto* del general Ramírez oficializó la celebración.

Después, la costumbre se fue olvidando. Es que cada vez resultaba más difícil justificar aquel hecho, que abrió el hábito de los golpes militares en la Argentina, hasta entonces el país más estable de América.

Ahora, con la perspectiva de medio siglo largo trans-

currido, resulta difícil no ya justificar sino entender por qué se tumbó a Yrigoyen, y con él una legalidad constitucional que desde luego no era perfecta, pero que tenía en sí todas las posibilidades de perfeccionarse.

En 1928, Yrigoyen había triunfado abrumadoramente sobre una fracción de su propio partido —el antipersonalismo— apoyado por los viejos grupos conservadores. Volvía el caudillo radical al poder con sus 76 años de edad, con un partido que disponía de casi todos los gobiernos provinciales y la mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque no del Senado, donde sus fieles estaban en minoría. Estos tres datos (edad, mayoría de gobiernos provinciales y de diputados, imposibilidad de superar la oposición en el Congreso por la relación de fuerzas en el Senado), son importantes para caracterizar los dos años de gobierno radical, entre octubre de 1928 y setiembre de 1930.

La edad: es indudable que los muchos años de Yrigoyen aparejaron cierta atonía en la gestión gubernativa. Personal y minucioso en el manejo de la cosa pública, esa parsimonia se acentuó al comenzar su segunda presidencia, transmitiéndose a los sectores del Estado que dependían de manera directa de sus decisiones.

En ningún momento el Presidente perdió su lucidez, como afirmaba la oposición, que aseguraba que "el Peludo" estaba reblandecido: simplemente le ocurrió lo que suele ocurrirle a los viejos cuando acentúan sus pequeñas manías: se toman más lentos para resolver, tienden a entrar en charlas largas y difusas con frecuentes recuerdos del pasado y se fatigan a medida que se alarga la jornada. Estas fallas no eran catastróficas, no paralizaban el país, aunque sin duda producían cierta disrit-

mia en el manejo administrativo y, sobre todo, daba lugar a que Yrigoyen prefiriera la frecuentación de quienes trataban de acolchonarle los ecos de una realidad nacional cada vez más alborotada, con la intención de ahorrarle disgustos y preocupaciones.

Por otra parte, la cómoda mayoría obtenida por los radicales en 1928, con la consecuencia de hacerlos oficialistas en muchas provincias y en la Cámara joven, los había revestido de cierta soberbia. Pasara lo que pasara, ¿quién podía dudar del prestigio del "Viejo"? ¿Quién le podía ganar? ¿Quién dudaría de la habilidad de su capitanía? Lo único que tenía que hacer su partido era no traerle problemas; quedarse quieto, limitarse a refutar las calumnias de la oposición y esperar las directivas de don Hipólito... Así fue extendiéndose un tono pasivo, orondo, satisfecho, en una fuerza que debía haberse dinamizado para suplir las fallas humanas de su jefe.

Finalmente, el Congreso. O mejor dicho, el Senado.

Detalladamente, desde la asunción de Yrigoyen a la primera magistratura, con una increíble frialdad, los senadores de la oposición torpedearon todas las iniciativas del Presidente. Se postergaba el tratamiento de leyes esenciales para dejar paso a interminables debates políticos: el discurso de Federico Cantoni defendiendo su diploma en el Senado ocupa un librito de casi 300 páginas... En el Congreso, la oposición disponía de una espléndida caja de resonancia para difundir sus ataques contra Yrigoyen, al amparo de una irrestricta libertad de expresión.

Así, cada uno de estos factores negativos retroalimentaba a los otros. Un Congreso que no sancionaba leyes hizo que èl radicalismo se limitara a echar las culpas a

la oposición, sin adoptar ninguna iniciativa nutrida de imaginación; Yrigoyen no atinaba a advertir los síntomas de la intranquilidad y el malestar, y se mantenía inmutable. Entretanto, los efectos del "plebiscito" de 1928 se gastaban rápidamente y la opinión pública empezaba a cansarse de la pasividad gubernamental.

1930, un mal año

Durante la segunda presidencia de Yrigoyen, las ondas de la explosión financiera iniciada en la Bolsa de Nueva York el "jueves negro" (octubre de 1929) se estaban expandiendo pero no habían llegado con mucha intensidad todavía al Río de la Plata. Cierto, existía en el país la sensación de que. los prósperos tiempos de Alvear ya habían pasado, pero la palabra *crisis* no formaba parte aún de la conversación de los argentinos. Nuestras exportaciones –cereales, carne, oleaginosos– empezaban a encontrar dificultades de colocación en sus tradicionales mercados porque el sistema de pagos internacionales había entrado en picada; pero el problema había ocurrido varias veces en las últimas décadas, sin mayores consecuencias. Había alguna desocupación pero el dinero mantenía su valor constante, la deuda externa no inquietaba y el crédito argentino hacía de nuestro país un cliente codiciado por los banqueros europeos y norteamericanos.

Sin embargo, algo empezó a andar mal en estas tierras a partir de 1928. Crecía la delincuencia; se descubrían los manipuleos de la Zwi Migdal, una organización que explotaba la trata de mujeres; la banda de

Di Giovanni cometía algunas de sus hazañas más resonantes; la *mafia* hacía comparable a Rosario con Chicago.

Estallan algunas huelgas duras. Pero lo que sin duda entraba en un peligroso territorio de intolerancia y violencia era la política.

En noviembre de 1929 es asesinado en Mendoza Carlos Washington Lencinas, "el gauchito Lencinas", por un oscuro partidario de Yrigoyen; un mes más tarde, el propio Yrigoyen sufre un atentado y la custodia presidencial, atropelladamente, acribilla al agresor. Resultó ser un italiano medio loco, de antecedentes anarquistas; un pobre hombre, en definitiva, que había creído un deber moral matar al "tirano".

El año 1930 se inició en este clima. En marzo se realizaron elecciones de diputados en todo el país. Cuando terminó el escrutinio quedó revelado que el radicalismo había perdido un inquietante porcentaje de votantes en relación con 1928, aunque en conjunto no hizo mala elección. Pero la Capital Federal dio el gran *batacazo*: ganaron los socialistas independientes —desprendimiento del viejo tronco socialista— furiosamente antiyrigoyenistas; el partido de Yrigoyen, por su parte, entró tercero. De modo que el ciudadano que fuera "plebiscitado" en 1928 ¡ahora era repudiado por el electorado porteño! Este hecho, que debía haberse visto en la perspectiva del juego democrático como una saludable reacción frente a las fallas oficialistas, fue interpretado como una "luz verde" para voltear al Presidente. No bastaba que el plebiscitado de ayer fuera repudiado hoy; había que echarlo...

De marzo en adelante, todo se aceleró. Las sesiones

del Congreso no eran otra cosa que furiosas batallas verbales en torno a diplomas y comicios. La oposición, estimulada por los resultados electorales, extrema sus acusaciones: Yrigoyen, ese tirano senil, está rodeado de un círculo que le imprime ejemplares especiales de los diarios para que no se intranquilice y le llevan muchachas bonitas para entretenerlo... Toda clase de dislates corren en esos días como moneda de buena ley. El diario *Crítica* se lleva la palma de las injurias contra "el Peludo" y *La Fronda* ventila en su primera página la incontinencia urinaria del Presidente.

Yrigoyen sigue sin inmutarse. El radicalismo intenta débilmente contraatacar, movilizando a sus huestes de comité en actos de apoyo al gobierno; entonces los opositores claman que es la Mazorca rediviva y comparan a Yrigoyen con Rosas.

Pero ¿a qué se debe todo este barullo? ¿Por qué esta ofensiva contra un gobierno que no reprime, no persigue, que en el peor de los casos es sólo inoperante?

La revolución cantada

Lo que ocurría era una consecuencia directa del *plebiscito* de 1928. Las fuerzas conservadoras no habían podido nunca articular un partido que jugara frente al radicalismo el contrapunto previsto por la Ley Sáenz Peña: un partido en el gobierno, el otro esperando su turno desde la oposición. Durante la primera presidencia de Yrigoyen los conservadores se desintegraron y buscaron infiltrarse en el nuevo oficialismo o tocarlo desde el Congreso, los grandes diarios y las posiciones

que controlaban. El sexenio de Alvear fue un alivio y les permitió fomentar la división radical, esperando impedir el retorno de Yrigoyen a través de una conjunción antipersonalista-conservadora. Pero cuando la elección de 1928 evidenció la sólida mayoría yrigoyenista, entonces la perspectiva de otra presidencia *peludista* los desesperó. Nunca volverían al poder mediante elecciones —pensaron— y por lo tanto había que buscar otros medios... El ex ministro de Guerra de Alvear, general Agustín P. Justo, empezó a conspirar con el grupo de jefes que le eran adictos, esperando el desgaste del gobierno para activar su complot.

A mediados de 1930 su propia urdimbre se enredó con la que paralelamente estaba tejiendo el general José F. Uriburu, ex diputado conservador, que se había rodeado de un grupo de jóvenes deslumbrados por el espectáculo imperial de Mussolini. Cada general perseguía propósitos diferentes: Justo quería sacar a Yrigoyen y trascartón estructurar un frente político con conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes, para hacerse elegir presidente. En cambio, Uriburu aspiraba a un cambio de fondo: reformar la Constitución para establecer un Estado corporativo, imponer el voto calificado y crear un sistema autoritario y jerarquizado. Ambos conversaron a través de delegados: Justo no tuvo inconveniente en aceptar aquellos delirios pues sabía que Uriburu, aunque valiente y decidido, era poco habilidoso y su utopía habría de agotarse en el camino; Uriburu, por su parte, aceptó modificar el texto de la proclama revolucionaria para no asustar con sus sueños fascistas. Fue un negocio de gitanos en el que cada uno creyó engañar al otro en aras del fin común: tumbar al gobierno.

A fines de agosto todo estaba listo. El tema de la revolución se discutía públicamente. La agitación política se mantenía en ebullición por los diputados opositores y los diarios. Pocas voces se alzaron para advertir el peligro que corrían las instituciones: sólo un jurista de nota, Alfredo Colmo, y el dirigente socialista Nicolás Repetto hicieron llamados a la cordura. Pero no había espacio para la sensatez y hasta los sucesos más triviales se aprovechaban para acorralar al gobierno. En la Exposición Rural, el ministro de Agricultura fue silbado, al punto de que no pudo pronunciar su discurso. Todo Buenos Aires estaba enamorado de la revolución: Buenos Aires, pues el resto del país permanecía tranquilo, salvo San Juan y Mendoza donde la proximidad de las elecciones caldeaba los ánimos bajo intervenciones federales acusadas de incurrir en presiones de toda laya, una de las pocas acusaciones opositoras no desprovistas de veracidad.

Sólo faltaba algún detalle: un alboroto estudiantil, por ejemplo, o un muerto... Esto completaría las condiciones pre-revolucionarias.

Hay que voltear al "Peludo"...

El 29 de agosto la ciudad amaneció empapelada de carteles firmados por el presidente de la Liga Patriótica. Exigía la renuncia del Presidente: *"La renuncia o la guerra necesaria"*. Al día siguiente, otros carteles signados por una *Juventud Universitaria* reclamaban al gobierno explicaciones sobre sus *"alarmantes actividades bélicas"*. Ese día trasciende que el Presidente está enfermo. El 2 de setiembre, la noticia bomba: el ministro de

Guerra, general Luis Dellepiane, renuncia a su cargo. En su dimisión, después de reafirmar su solidaridad con el Presidente, denuncia que ha encontrado a su lado *"pocos leales y muchos intereses"*.

Dellepiane daba en la tecla. Había seguido el hilo de la conspiración y arrestó a algunos de los jefes comprometidos, pero el Presidente le ordenó dejar sin efecto esas medidas: Yrigoyen no creía que se estuviera conspirando y su vicepresidente, Enrique Martínez, así como el ministro del Interior, Elpidio González, le aseguraban que Dellepiane veía fantasmas y creaba inquietud con sus medidas. ¿Qué responsabilidad tuvieron en la indefensión del gobierno? Mucho se ha debatido sobre el tema pero el veredicto de la historia es, en el caso más benigno, ambiguo. Lo cierto es que Martínez y González mantuvieron hasta el final una actitud sospechosamente pasiva frente a la conjura y ante la revolución misma.

El mismo día de la renuncia de Dellepiane *Crítica* publica un título a toda página: *"La situación del país es una bomba que no tardará en estallar"*. Las oficinas de *Crítica* eran el centro de reunión de los conspiradores; meses más tarde el diario de Botana sería clausurado por sus compañeros de complot...

El 3 de setiembre se realizan manifestaciones estudiantiles. Como los protestones no son muchos, se decide renovar las manifestaciones al día siguiente, con gente de todas las facultades. El 4 se reiteran los alborotos por el centro de la ciudad; frente a la Casa Rosada estalla un tiroteo y muere un joven. ¡Ya está! ¡El mártir que faltaba! Poco importa que el *estudiante asesinado* resulte ser un bancario radical: ahora se puede hablar de la *sangre derramada*.

El 5 de setiembre, Yrigoyen, que sigue afectado por un proceso gripal, delega el Poder Ejecutivo en el vicepresidente Martínez. La noticia desconcierta a todos. Ahora, con la delegación del mando, el objetivo de los conspiradores se ha logrado: el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo puede descongestionar el ambiente, y de hecho lo hace, suspendiendo las cuestionadas elecciones de San Juan y Mendoza. Puede formar un nuevo gabinete, imprimir otro ritmo al gobierno, dar alguna satisfacción a la oposición.

Pero la conspiración no se detiene: hay que voltear al gobierno, no sólo a Yrigoyen. El 6 de setiembre a la madrugada, un grupo de diputados opositores se constituye en la Base del Palomar y en Campo de Mayo para "sacar las tropas". Los aviadores acceden pero el acantonamiento militar se declara legalista: los diputados se van, asustados por su fracaso. El único que sigue adelante es Uriburu: se instala en el Colegio Militar y logra salir a media mañana encabezando algunos centenares de cadetes y unos pocos elementos más que alcanzan a sumársele. Esta breve columna, aclamada por el veleidoso pueblo de Buenos Aires ante el estupor del país y la pasividad del resto del Ejército, será la que llegue a las 18 horas a la Casa Rosada, arranque la renuncia a Martínez e imponga un gobierno provisional presidido por Uriburu, preludio de una década signada por el fraude electoral y la degradación de la democracia.

Si los enemigos de Yrigoyen hubieran contenido su ansiedad de voltearlo, el juego de la democracia los habría llevado limpiamente al poder en 1934. No era el gobierno radical un sistema tiránico; en cambio, Uriburu ordenó fusilamientos, detenciones, confinamientos y

destierros, echó jueces y cerró diarios y bajo su poder empezó a practicarse sistemáticamente la tortura. Y por sobre todo, la revolución de 1930 sentó el precedente de las intervenciones militares en la política y frustró el camino hacia una democracia todavía defectuosa pero perfectible.

II

1931: LA SALIDA ELECTORAL

Puede decirse que al día siguiente de la revolución de setiembre de 1930, el gobierno provisional encabezado por el general José Félix Uriburu empezó a elaborar la salida política.

Pero en el seno del poder *de facto* existían dos tendencias contrapuestas; según quién triunfara en el forcejeo previo, la fórmula tendría un contenido u otro. Uriburu había hecho la revolución contra Yrigoyen con el convencimiento de que el sistema democrático no tenía viabilidad en la Argentina. ¿No lo demostraba, acaso, el gobierno del "Peludo", con su ineptitud, la guaranguería de los dirigentes radicales, la grisácea tonalidad de su gestión? El "plebiscito" de 1928, con sus 800.000 masivos sufragios a favor de Yrigoyen, ¿no evidenciaban que era imposible gobernar con la chusma? La hora de la espada había llegado —Lugones *dixit*— y Uriburu, rodeado de un pequeño grupo de jóvenes seducidos por el fascismo de Mussolini y las concepciones aristocratizantes de Maurras, se disponía a cancelar los partidos políticos, modificar corporativamente la estructura del Congreso, imponer el voto calificado y establecer, en suma, un Estado autoritario que no dependiera de los veleidosos cambios de la multitud.

En el polo opuesto de este pensamiento se encontraba el general Agustín P. Justo. Había sido ministro

de Guerra de Alvear, era ingeniero civil y tenía una habilidad política indiscutible. Justo quería mantener el sistema democrático... siempre que sirviera a sus intereses. Estos se fundamentaban en varios planes, que debían ser recorridos según las posibilidades de éxito que presentaran. Una variante era, por ejemplo, ganar el apoyo del radicalismo. Otra, urdir una coalición de conservadores y antipersonalistas. Pero lo previo y fundamental era disuadir a Uriburu de sus tentaciones fascistas; sabía Justo que los argentinos no iban a tolerar la liquidación de una democracia que podía ser imperfecta aún, pero con la que estaban consustanciados, y que no existía apoyo significativo para las utopías del jefe de la revolución.

Errático y vacilante, Uriburu, después de denostar públicamente a los políticos y afirmar que "la política es una mala palabra", condesciende a convocar a elecciones en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para el mes de abril (1931). Su ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, está seguro del triunfo conservador: los radicales todavía están aturdidos con el golpe de setiembre; Yrigoyen está preso en Martín García; Alvear, cuya posición frente a la revolución ha sido en principio aprobatoria, se encuentra en Europa. Hay muchos dirigentes radicales presos, los empleados que huelen a "peludismo" son cesanteados, el partido está desorganizado y sin autoridades. Pese a estas adversas condiciones, el radicalismo de las tres provincias acepta el desafío electoral. En Buenos Aires, a fines de marzo la convención provincial proclama a Honorio Pueyrredón y a Mario M. Guido como candidatos a gobernador y vicegobernador, e improvisándolo todo se lanza a la lucha.

El 5 de abril de 1931 se realizan las elecciones en Buenos Aires y entonces ocurre lo inesperado: el radicalismo, desalojado del poder seis meses atrás en medio del repudio o la indiferencia del público, triunfa en el primer estado argentino. Cuando termina el escrutinio, Pueyrredón-Guido han obtenido 218.000 votos sobre los candidatos conservadores que reunieron 187.000 y los socialistas, con 46.000. Los entendidos en las lides políticas comentaban que los radicales fueron a los comités conservadores y comieron sus empanadas, pero votaron por su partido... Fue la respuesta de "las comunas y las chacras bonaerenses" –diría Ricardo Rojas– a los desbordes del gobierno *de facto*, que a esa altura de su trayectoria había intervenido las universidades, separado a jueces de sus cargos, clausurado diarios, fusilado sin juicio a anarquistas e incurrido en hechos de torturas que abrirían, lamentablemente, una larga secuela en los años siguientes.

Una nueva estrategia

El triunfo radical del 5 de abril obligó a Uriburu a variar su estrategia. Suspendió las convocatorias electorales de Santa Fe y Córdoba, se desprendió de su ministro del Interior e inició un tortuoso proceso que habría de culminar con la anulación de los comicios bonaerenses. Quedaba claro que la mayoría del electorado seguía siendo radical. También quedaba claro que sus iniciativas corporativas carecían de toda viabilidad. Sólo restaba al gobierno *de facto* tejer una salida electoral que permitiera entregar el poder a un amigo; o al menos, a uno que no fuera enemigo... O sea, Justo.

Justo no integraba el gobierno provisional. Había tomado distancia de Uriburu sin romper con él. Si conseguía la adhesión del radicalismo, su fortuna estaba hecha. El 25 de abril, apenas terminado el escrutinio bonaerense, Justo se dirigía al puerto de Buenos Aires para recibir a un ilustre viajero que retornaba al país después de dos años y medio de ausencia. Muchos miles de radicales también se dieron cita allí para aclamar a Marcelo T. de Alvear. Cuando descubrieron la presencia de Justo, la silbatina fue un vendaval. Sin que nadie los hubiera instruido, sin estar al tanto de intrigas y cabildeos, esos humildes radicales que buscaban un nuevo guía ahora que don Hipólito estaba cautivo, intuían que Justo estaba allí para manijear a su antiguo presidente. Fue la primera de las épicas silbatinas que Justo recibiría en los años sucesivos, pero ni ésta ni las otras modificarían nunca sus planes...

Pocas semanas después de su llegada, la firma de Alvear encabeza un documento conocido como "Manifiesto del City" (por el hotel donde se alojaba) en el que convoca a la reorganización de un radicalismo sin exclusiones, para que el partido, "dignamente fortificado en la adversidad", pueda asumir con responsabilidad las exigencias que el momento político le impone. Se adhirieron casi todos los dirigentes expectables, tanto los de origen yrigoyenista como muchos de los que en 1928 se habían definido como antipersonalistas. Doce días más tarde, en presencia de la receptividad con que fue acogido el documento del City, los firmantes se constituyen en comisión reorganizadora de la UCR bajo la presidencia de Alvear. El ex presidente dejaba atrás la regalada vida que había llevado en Europa y olvida-

ba sus resentimientos con Yrigoyen: el infortunio de sus antiguos correligionarios lo había conmovido y sentía la necesidad de librar una gran batalla cívica por el restablecimiento de la democracia argentina.

Por ese lado, pues, Justo no lograría nada. Entonces se dispone a estimular, entre bambalinas, la organización de otro radicalismo. Paralelamente a las reuniones del City Hotel se constituyen en el Hotel Castelar los grupos antipersonalistas que no desean regresar al viejo radicalismo y están dispuestos a apoyar la candidatura de Justo. De modo que a lo largo del mes de mayo, la "reorganización del City" y la "reorganización del Castelar" definen las líneas que se jugarán en la próxima etapa política. Pero Justo necesita algo más: que Uriburu se pronuncie abiertamente por una salida electoral, es decir que convoque a elecciones. Para convencer a un gobierno *de facto* de que llame a comicios, nada mejor que un susto. Y Justo está en condiciones de ayudar a darlo...

Apurar el trámite

El 20 de julio, una noticia conmovía al país: ¡revolución radical en Corrientes! El teniente coronel Gregorio Pomar había tomado por la fuerza el regimiento 9 de Infantería; al forcejear con el teniente coronel Lino H. Montiel, jefe de la unidad, que intentaba resistir, se le había escapado un tiro y éste había muerto. También se había tomado la ciudad de Resistencia. Desde fines de 1930 se hablaba de conspiraciones radicales y en varias oportunidades habían sido detenidos algunos dirigentes. Pero ahora la cosa parecía ir en serio...

Durante un día, los revolucionarios esperaron algún acontecimiento que no se produjo. Luego, Pomar, acompañado de unas 80 personas, cruzó al Paraguay, mientras unidades de Entre Ríos y Santa Fe comenzaban a movilizarse para reprimir. "La intentona, descabellada a todas luces, se traduce en saqueos y en asaltos que en manera alguna podrán justificarse" decía *La Prensa*, al otro día. El gobierno provisional publica un comunicado acusando a la dirigencia radical de haber tomado contacto con los "ácratas"; aseguraba que se había prometido entregar Buenos Aires "al saqueo y desmán de las turbas anarquistas". Al mismo tiempo de esta imaginativa declaración, el gobierno de Uriburu notifica a Alvear y media docena de los más importantes dirigentes de la UCR, que deben salir del país. El 28 de julio (1931) Alvear se embarca en el *Alcántara* rumbo a Río de Janeiro, entregando antes a la prensa una declaración que empieza diciendo "manos crispadas me alejan..."

¿Tuvo algo que ver Justo con el golpe de Pomar? El teniente coronel Pomar era un militar íntegro y valiente; había sido edecán de Yrigoyen y su fe radical era indiscutible. Pero se susurró por entonces que había sido víctima de una trampa: se le habría hecho creer que el intento de Corrientes formaba parte de una vasta conspiración que estallaría contemporáneamente en varios puntos del país para derrocar a Uriburu. Como quiera que sea, lo de Corrientes tuvo consecuencias redondas para los planes de Justo, y si él no fue el oculto estimulador de la patriada de Pomar, mereció haberlo hecho...

Por un lado, se había desarticulado la reorganización

radical con la expulsión de Alvear y su estado mayor, que fue seguida por numerosas detenciones. Por otro lado, el gobierno *de facto* —ahora consciente de su fragilidad, agregada a una impopularidad abrumadora y acaso, también, a las primeras manifestaciones de la enfermedad que en un par de años terminaría con la vida de Uriburu— resolvió convocar a elecciones presidenciales para el 8 de noviembre de ese mismo año.

El 9 de mayo ya había llamado a comicios generales para elegir los poderes provinciales y los integrantes del Congreso Nacional; eventualmente, decía el decreto, "si las fuerzas cívicas llegaran a una concordancia para la reconstrucción institucional", se extendería la convocatoria a la elección de presidente y vicepresidente de la Nación. Aquí aparecía la palabra que definiría el esquema político de la década de 1930: Concordancia. Una hermosa palabra porque significa entendimiento, acuerdo, coincidencia, pero que en este caso arrastraba como condición para concretarse, una maniobra que excluyera al radicalismo. Ahora, después del golpe de Pomar, el gobierno *de facto* incluyó en las elecciones de noviembre la elección presidencial. Y, con el pretexto de unificar los actos comiciales, anuló los resultados del comicio del 5 de abril.

De allí en adelante, la salida electoral del gobierno *de facto* avanzaría inconteniblemente. Quedaban atrás los sueños fascistas de Uriburu. Pero también quedaban atrás las posibilidades de restaurar un sistema democrático fundado en la verdad electoral y en el juego limpio entre oficialismo y oposición. Por otra parte, los años del gobierno provisional de Uriburu —y también los primeros de la presidencia de Justo— fueron muy duros

para el país. La crisis se hacía sentir con todo su rigor: había desocupación y pobreza. Rebajas de sueldos, atrasos en los pagos, despidos, ejecuciones hipotecarias y de prendas, quiebras, eran expresiones comunes del malestar económico y social. Los "barrios de las latas" evidenciaban la inferiorización del nivel de vida de los trabajadores y una desesperada búsqueda del "mango" se convirtió en materia de tangos y sainetes.

Uriburu fue, como es natural, el destinatario del odio popular, acaso sin mayor culpa en un proceso de crisis que era nuevo para la Argentina y desconcertaba a todos. Quien fuera el aclamado jefe de la revolución de setiembre era ahora aborrecido. A unas cucarachas que aparecieron por entonces y cuyo picor era muy molesto, se las llamó "uriburus". Y hasta Jorge Luis Borges compuso unas décimas –irreproducibles– hablando pestes del presidente *de facto*.

La Concordancia y la Alianza Civil

En abril, las fuerzas conservadoras provinciales, abandonando su vieja tradición de autonomía local, se habían constituido como Partido Demócrata Nacional; en julio, su Convención invita a las fuerzas afines a una "concordancia" con candidatos comunes; el 16 de setiembre los conservadores proclaman a Justo como candidato a presidente y a Julio A. Roca, el hijo del General, a vicepresidente. Cuatro días atrás, los "radicales del Castelar" anuncian su apoyo a Justo, con Eduardo Laurencena como compañero de fórmula; al renunciar este prestigioso dirigente entrerriano, lo sustituyen por

el constitucionalista José Nicolás Matienzo. Finalmente, los socialistas independientes, liderados por Antonio Di Tomaso, levantan también el nombre de Justo. He aquí, pues, armada la "Concordancia": el viejo partido conservador fraguando el entendimiento con los disidentes del radicalismo y los que desde 1925 lo eran del socialismo. Un invento político que reedita el frente antiyrigoyenista de 1928 y cuya fuerza es indiscutible en algunos distritos, pero que no puede obtener la mayoría del electorado en elecciones limpias; allí están los resultados cancelados del 5 de abril para evidenciarlo.

Hay dos fuerzas cívicas importantes y con una honorable trayectoria que salen al cruce de la Concordancia. El Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista proclaman el 31 de agosto una fórmula común integrada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Se presentan como "Alianza Civil" y tienen buenas perspectivas en Capital Federal y Santa Fe, pero no en el resto del país, donde el anticlericalismo de ambos candidatos asusta y por cuyas modalidades personales les cuelgan el sobrenombre de la "fórmula del cianuro"...

A dos meses de las elecciones, pues, la franja electoral de la derecha está cubierta por la Concordancia; la de la izquierda, por la Alianza Civil. ¿Y el radicalismo? ¿Qué ocurre con la fuerza que se considera de centro, moderada, representativa de la clase media? La UCR está viviendo una penosa ordalía.

Exiliados sus próceres más conspicuos, la responsabilidad de llevar adelante la reorganización radical había quedado en manos de Adolfo Güemes, nieto del héroe salteño, un solterón activo y enérgico que, venciendo toda suerte de dificultades, logró a fines de setiembre

constituir el Comité Nacional y reunir la Convención Nacional de la UCR. El cuerpo proclama un binomio de guerra: Alvear-Güemes, que significa el enfrentamiento total con el gobierno *de facto*. Alvear, desde Río de Janeiro, renuncia a su nominación para no constituir un obstáculo a cualquier posible solución, pero la Convención insiste en su candidatura. Entonces se traslada a Montevideo para seguir más de cerca los acontecimientos y al desembarcar se entera de que el gobierno de Uriburu ha vetado su nombre y el de Güemes. Las listas de electores "que respondan a las candidaturas de dichos ciudadanos" no serán oficializadas, ni computados los votos a su nombre.

Siguen dos semanas de febriles cabildeos; algunos dirigentes "blandos" hacen gestiones para saber si el gobierno de Uriburu aceptaría candidatos radicales más potables. Pero la estrategia de Justo consiste, precisamente, en que la UCR responda a la provocación gubernativa con una declaración de abstención: excluido el radicalismo, ganarle a la Alianza Civil será juego de niños... Tal como suponía, el Comité Nacional, agotadas todas las gestiones, resuelve el 27 de octubre declarar la abstención en las elecciones del 8 de noviembre. Un vibrante manifiesto, "El Comicio Cerrado", redactado por Ricardo Rojas, explica al país los motivos de la decisión. Una decisión que —como se vio más tarde— conducía al radicalismo a un callejón sin salida. Pero ¡qué otra cosa se podía hacer!

Triunfo de la Concordancia

Ni la campaña electoral fue entusiasta ni el resultado fue materia de especulaciones. La Alianza Civil fue hostilizada por policías bravas y sus candidatos tuvieron problemas en varios puntos del país. Por su parte, Justo, sonriente y tranquilo, "candidato bígamo", como se le llamaba, con sus dos compañeros de fórmula, ya actuaba con talante presidencial... El 8 de noviembre hubo actos de violencia contra opositores en Buenos Aires, Mendoza y San Juan, pero en general los comicios fueron tranquilos: el fraude ya estaba perpetrado con la exclusión de los radicales, que se abstuvieron de votar. El escrutinio no ofreció sorpresas: Justo-Roca obtuvieron 234 electores, sobre 124 de De la Torre-Repetto. La Concordancia tendría mayoría en el Congreso y en ocho provincias. En Santa Fe habían triunfado los demócratas progresistas, en Entre Ríos gobernaban antipersonalistas no adheridos a la Concordancia; los Cantoni volvían al poder en San Juan, y en Tucumán ocuparía el sillón de gobernador un curioso personaje, Juan Luis Nougués, el fundador del Partido Bandera Blanca.

El 20 de febrero de 1932 el general Uriburu, con el rostro ya estragado por su enfermedad, entregaba las insignias del poder al general Justo. No era ésta la solución que había deseado el jefe de la revolución de 1930. Pero tampoco era una buena solución para el país. El triunfo de la Concordancia aparejaba una necesidad cruel, la de dar permanencia al fraude electoral. De este modo, la administración de Justo, progresista en muchos terrenos, quedó marcada con prácticas condenables que la vaciaron de toda autoridad moral e

hirieron gravemente la frágil democracia argentina. En último análisis, la revolución de 1930, aclamada en su momento como una exigencia de saneamiento, había desembocado en una triste repartija basada en la mentira. Y su mayor beneficiario, el conservadorismo, cargaría durante décadas con esta tremenda responsabilidad.

III

1943: EL GOLPE MILITAR

Si la revolución de 1930 fue "cantada" mucho antes de concretarse, la de 1943 ocurrió de un modo súbito y sorpresivo. La de 1930 estuvo rodeada de fervor civil; en 1943 las tropas marcharon desde Campo de Mayo hasta Plaza de Mayo rodeadas sólo de una benévola curiosidad. Pero había otra diferencia, y ésta era básica: el gobierno tumbado en 1930 estaba revestido de legitimidad y funcionaba, bien o mal, dentro de una estricta normalidad constitucional. En cambio, el gobierno volteado en 1943 procedía del fraude electoral y había vaciado su propia legalidad con métodos discutibles que lo llevaron progresivamente a un virtual autoritarismo.

La Concordancia

Desde 1932 había gobernado un sistema político, la Concordancia, basado en el acuerdo entre las dos fuerzas más importantes de la coalición antiyrigoyenista de 1928/30: el conservadorismo y el antipersonalismo. La Concordancia sostuvo la presidencia de Justo, al principio con relativa facilidad, puesto que el radicalismo se abstenía de concurrir a los comicios; en una segunda etapa, a partir de 1935, mediante la instrumentación de un escandaloso fraude electoral, única manera

de triunfar sobre un partido que seguía siendo mayoritario en los distritos más importantes del país.

Ese mismo fraude se reiteró para poner en marcha el segundo turno gubernativo de la Concordancia, en 1938. Los sucesores de Justo eran Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo, antipersonalista el primero, conservador éste, ambos aparentemente identificados con los principios generales de la política concordancista.

Pero aunque su elección estuviera viciada, el nuevo Presidente era profundamente legalista y democrático. Sabía que no podía gobernar indefinidamente sobre el escamoteo de la voluntad popular y se dispuso a limpiar su pecado inicial. Debió romper con sus propios amigos y librar una dura lucha contra los intereses creados alrededor de la Concordancia; pero a mediados de 1940, después de dos años de gobierno, el país veía en Ortiz una gran esperanza de saneamiento institucional. Infortunadamente, en ese momento la salud lo traicionó: una diabetes que arrastraba de años atrás se agravó, traduciéndose en una virtual ceguera. Así, Ortiz debió delegar el Poder Ejecutivo en su vicepresidente y esperar pasivamente una mejoría para continuar la política en que estaba empeñado: una política que no incluía solamente el adecentamiento de la vida cívica sino también la superación de la tradicional antinomia *radical-conservador* y la subsecuente formación de una fuerza política nueva que dejara atrás expresiones políticas que —consideraba Ortiz— ya habían caducado.

No regresó al poder. Su ordalía se prolongó dos años, hasta que debió renunciar definitivamente, rodeado por el respeto del país entero; poco después fallecía. Ya en ese momento (mediados de 1942) la figura que dominaba

cada vez con mayor firmeza el tinglado político era su antiguo vicepresidente, de quien ya hablaremos. Antes es necesario caracterizar esos últimos años de la década de 1930 y primeros de la del '40, que fueron el marco de una profunda transformación del país y condicionaron a las fuerzas que habrían de manifestarse en la revolución del 4 de junio de 1943.

De la crisis al cambio

La crisis que conoció su pico más alto en 1932/33 tuvo como principal característica la caída de nuestras exportaciones: vendíamos al exterior menos productos y cobrábamos por ellos menos divisas (la palabra "divisa" fue un invento posterior, pero significaba lo mismo: oro o monedas fuertes intercambiables). En consecuencia, al recibir menos divisas podíamos importar menos bienes, el Estado percibía menos derechos, la gente tenía menos dinero y todo el circuito económico tendía a achicarse, se hacía recesivo. En 1932 se hizo cargo del gobierno el elenco de la Concordancia, que resolvió afrontar la crisis con criterios que pueden discutirse pero sin duda fueron coherentes en sí mismos y consecuentes con los sectores sociales que representaba.

Así, el gobierno de Justo mantuvo una primera prioridad: preservar nuestras genuinas fuentes de riqueza, es decir las que producían las exportaciones más remunerativas y fáciles de colocar. O sea, la carne. (Desde luego, los beneficiarios de esta prioridad eran los ganaderos de la pampa húmeda, que se expresaban políticamente a través del conservadorismo.) En consecuencia se suscribió el

Pacto Roca-Runciman y se concedieron tratos preferenciales a las inversiones británicas, especialmente a las del área de frigoríficos y transportes, todo en aras del mantenimiento de las exportaciones de carne. También se intentó proteger el valor de la producción agrícola mediante juntas reguladoras que restringieron los cultivos. Paralelamente, el Estado emprendió algunas obras públicas —sobre todo, caminos— para paliar la desocupación, y no vaciló en demorar el pago de sueldos a sus empleados o aceptar que se rebajaran los salarios de algunos sectores obreros; así evitaba la emisión de papel moneda y mantenía invariable el valor del dinero. Lo lograron: no hubo inflación y lo que valía un peso en 1929 seguía valiendo un peso en 1934, pero ¡cómo había que remar para conseguir ese peso!

Era un plan que descargaba el peso de la crisis en los sectores populares, y por lo tanto fueron años de pobreza y desocupación, menos graves que la desocupación y la pobreza que flagelaban a Europa y Estados Unidos, pero de todos modos duramente sentidas en nuestro país, no habituado a estas caídas. Poco a poco, sin embargo, la vitalidad argentina fue aprovechando positivamente algunos de los efectos de la crisis. Podían importarse pocos bienes: entonces el ingenio criollo empezó a improvisar pequeñas industrias textiles, metalúrgicas y de la alimentación para suplir la mercadería que no llegaba de afuera. La miseria despoblaba los campos: los argentinos del interior venían a las grandes ciudades del litoral en busca de mejores horizontes y entonces se empleaban sin grandes pretensiones en esos improvisados talleres; se calcula que desde 1935 unos 100.000 migrantes internos se instalaron cada año silenciosamente en los suburbios de Bue-

nos Aires. Este proceso fue repentinamente activado por la guerra mundial: desde 1939 las importaciones europeas se hicieron difíciles y este proteccionismo inesperado favoreció la incipiente actividad industrial, que en poco tiempo se atrevió a exportar sus primicias, casi siempre caras y malas, pero fundamento, de todos modos, de un profundo cambio de la estructura económica y social argentina. Es cierto que la guerra mundial puso al desnudo la vulnerabilidad del país; de pronto faltaron neumáticos, petróleo, carbón, medicamentos, productos químicos ¡y hasta medias de seda para las damas! Pero estas carencias se suplían de uno u otro modo, y entretanto los granos, los oleaginosos y las carnes —que diez años antes no encontraban mercado en el mundo— eran desesperadamente buscados por las potencias aliadas.

Hacia 1943, pues, ese país de 1932/33 sacudido por la crisis, atado a los azares de su exclusiva producción agrícola-ganadera, que conocía el rostro huraño de las ollas populares y los "barrios de las latas", ese país que había tenido que mendigar a Gran Bretaña la colocación de su producción más importante, ahora era una nación cuya producción industrial superaba en valor a la proveniente del agro, vendía a los precios que quería, vivía un instante de plena ocupación y una euforia desbordante. Y aun se daba el lujo de permanecer neutral en plena guerra desatendiendo las presiones de Estados Unidos y ateniéndose a la política que le dictaban sus propios intereses nacionales.

El Presidente de la soberanía

Animador de esta política desde 1940 era el vicepresidente, que después de la renuncia de su antiguo compañero de fórmula se hizo cargo de la Presidencia de la Nación.

Ramón Castillo era un catamarqueño lacónico y obstinado que había sido juez y profesor de Derecho. Su ingreso a la política fue tardío, después de 1930, cuando ya estaba jubilado de la magistratura judicial, pero hizo una carrera vertiginosa favorecido por una serie de casualidades y ayudado por su prestigio de jurista y su aspecto de abuelito provinciano: breve estatura, piel tono mate y un cabello blanquísimo que combinaba con un bigote no menos albo, que le aparentaban más edad de la que realmente tenía: 67 años al asumir la presidencia.

Conservador por tradición y convicciones, Castillo disentía con Ortiz sobre la conveniencia de una auténtica democracia: prefería tutelar los destinos del país mediante el manipuleo de minorías esclarecidas que lo libraran de la demagogia y el desorden.

Cuando Ortiz delegó el mando, el vicepresidente se movió con suma delicadeza en su poder provisional porque se ignoraba si el enfermo podría retornar pronto a la Casa Rosada. A medida que pasaban los meses Castillo se fue afirmando, desprendiéndose de los ministros anteriores, colocó a sus propios hombres en los puestos clave y cuando, a mediados de 1942, asumió la primera magistratura en plenitud de facultades, ya manejaba con soltura todas las teclas de la política. Pero a un costo terrible: su respetabilidad como gobernante constitucional, porque había regresado (o permitido que se regresara) a las peores prác-

ticas políticas. Las elecciones de Santa Fe, Mendoza y, sobre todo, Buenos Aires de 1940/41 incluyeron toda clase de fraudes y violencias contra la oposición; varios dirigentes radicales fueron asesinados, entre ellos un general retirado. Con Ortiz, los argentinos habían creído posible una restauración de la democracia; con Castillo perdieron toda esperanza, porque el antiguo profesor de Derecho alentaba desembozadamente estos manipuleos, los únicos, por otra parte, que le permitían disponer de un cierto equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Al lado de este vulnerable flanco que significaba su tolerancia al fraude, Castillo era capaz de ejercer una política fundada en los intereses nacionales. Consciente de que la guerra mundial aislaba nuestro comercio, creó un esbozo de flota mercante con algunos barcos de países beligerantes que estaban fondeados en nuestros puertos. Nacionalizó la Compañía Primitiva de Gas al vencer la concesión de la empresa británica que explotaba este servicio, y el puerto de Rosario al expirar la que detentaba una compañía francesa. Alentó los proyectos de algunos militares patriotas que veían la necesidad de intentar la producción nacional de hierro y acero. Pero donde demostró su capacidad de defender a todo trance la política que, a su juicio, consultaba los intereses del país, fue en el campo internacional.

Era Ortiz presidente cuando estalló la guerra mundial, pero Castillo quedó a cargo del Poder Ejecutivo desde agosto de 1940, cuando la caída de Francia parecía prefigurar el inevitable triunfo del Eje. En diciembre de 1941, al producirse el ataque a Pearl Harbour, la Argentina empezó a sentir la presión de Estados Unidos para que declarara la guerra al Eje o, por lo menos, rompiera relaciones. Se-

ría imposible relatar la lucha librada por Castillo para defender la autodeterminación argentina; sólo diremos que el anciano catamarqueño, terco en lo que juzgaba la posición más digna y conveniente, enfrentó toda clase de obstáculos sin declinar la defensa de nuestra soberanía. En una Argentina profundamente dividida entre "aliadófilos" y "pro nazis" —como lo había estado en 1936/39 entre "rojos" y "franquistas"— este hombre aborrecido por los radicales a causa del fraude que apañaba, tildado de "pro nazi" por los socialistas y comunistas, presionado por algunos conservadores para adoptar posiciones más conciliadoras con Washington, carente por origen y temperamento de apoyo popular, comprometido por algunos germanófilos que veían en su neutralidad una supuesta simpatía por el régimen hitlerista, este argentino, "el Viejo Castillo", fue adquiriendo en vastos sectores de la opinión pública el carácter de un símbolo de la soberanía. Reflejaba el estado de ánimo del país en ese momento, sólido y optimista, y tenía el apoyo de un sector que Castillo mimaba: el Ejército.

Ejército y política

Un Ejército sordamente dividido. Muchos de sus jefes y oficiales eran pro aliados, creían que la Argentina debía sumarse a los países que combatían al Eje y apoyaban la perspectiva de una segunda presidencia de Justo. Otros eran pro germanos y apreciaban que así como Gran Bretaña había ayudado a la Argentina a emanciparse de España, una Alemania triunfante podía ayudarnos a sacudir la dependencia británica. Todos temían la influencia comu-

nista y casi todos advertían los sustanciales cambios que se estaban produciendo en el terreno económico y social, y se dolían de la incapacidad de los elencos políticos del oficialismo y la oposición para encauzarlos.

Castillo conocía estas divisiones e inquietudes. En 1940/41 se habían producido alteraciones en algunas unidades militares y bases aéreas, y hasta hubo un conato de *putsch*, rápidamente sofocado. Suponía el Presidente que el apoyo de núcleos nacionalistas del Ejército podía robustecer su poder y ayudarlo a imponer al presidente que habría de sucederlo en 1944. Entonces pactó con ellos y cumpliendo el compromiso contraído disolvió por decreto al Concejo Deliberante de Buenos Aires (un nido de coimas, pero, de todos modos, la institución municipal tradicional), y en diciembre de 1941, también por decreto, impuso el estado de sitio en todo el país. Cuando se le preguntó si la medida había sido adoptada por unanimidad en el acuerdo de ministros, Castillo respondió socarronamente:

—Sí. Por unanimidad de uno: yo, que soy el que manda...

Un Estado cada vez más autoritario mantenido sobre la base del fraude electoral no parecía algo muy sólido, pero Castillo creía en su derecho de imponer el nombre del próximo presidente, que debía elegirse en setiembre de 1943.

La cuestión electoral también agitaba a la oposición: el radicalismo, fallecido Alvear, buscaba integrar un frente con los socialistas, los demócrata progresistas y aun los comunistas; Justo trataba de ser el beneficiario de esta conjunción, pero a los radicales se les retorcían las tripas pensando en esta negra perspectiva. El panorama cambió

en enero de 1943, cuando Justo murió repentinamente: ahora el frente democrático tenía que buscar otro nombre.

Por su parte, Castillo se sintió en condiciones de imponer su sucesor al viejo estilo: con una orden. Enérgicamente, cortó las aspiraciones del gobernador de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, y después deslizó el nombre que guardaba *in petto*: Robustiano Patrón Costas, industrial azucarero cuya imagen —probablemente deformada— era la de un señor feudal del Norte, explotador de sus obreros. Este nombre implicaba que las elecciones presidenciales serían, otra vez, un sucio fraude. Curiosamente, Patrón Costas era proclive a una posición aliadófila. Un interrogante inquietó entonces a los militares nacionalistas: ¿no cambiaría la política de neutralidad de Castillo?

Develada la incógnita oficialista, el frente democrático intentó una jugada magistral: ya que se trataba de encontrar un candidato al que no se pudiera inferir el agravio de un fraude, ¿por qué no proclamar al ministro de Guerra? El general Pedro P. Ramírez representaba al Ejército, y al Ejército, ya se sabe, no se lo corre con matones de comité ni comisarios bravos... Una delegación visitó reservadamente a Ramírez. El ministro no rechazó la idea ni la aceptó. Pero Castillo, enterado de la gestión, exigió un terminante desmentido. El ministro publicó un comunicado tan flojo y ambiguo que el Presidente le reiteró su exigencia y acaso le pidió la renuncia. Era el 3 de junio de 1943, Ramírez fue a Campo de Mayo y relató el episodio a sus camaradas. La reacción fue inmediata: el Presidente agraviaba a todo el Ejército con el despido del ministro. Se resolvió deponerlo. En realidad, el hecho determinante era minúsculo pero había activado varias conspiraciones:

la de los antiguos justistas, la de los pro nazis y la de una misteriosa logia, el GOU, cada una por sus propios motivos.

Tan improvisada fue la decisión, que nadie pensó en el presidente que reemplazaría a Castillo: de hecho, el general Arturo Rawson, aliadófilo, asumió la jefatura del movimiento, lo que más tarde traería algunos problemas.

El 4 de junio a la madrugada Ramírez entregó su renuncia a Castillo y le informó que las tropas de Campo de Mayo iniciaban su marcha para derrocarlo. En la tarde de esa jornada, los militares se habían instalado en la Casa Rosada. Muy pocos de los dirigentes revolucionarios tenían idea del rumbo que podían tomar las cosas, pero todos (y también la mayoría del público) tenían la sensación de que se había clausurado una etapa cuyo anacronismo y vetustez ya eran insoportables, en la medida que había prescindido de las nuevas realidades del país manejándolo como si estuviera medio siglo atrás. Y esto justificó, al menos al principio, este golpe anodino y casi palaciego que tres años después desembocaría en un movimiento popular de insospechable magnitud.

IV

1946: LA SALIDA ELECTORAL

En el invierno de 1945, el gobierno *de facto* surgido dos años antes, buscaba y no encontraba una salida decorosa. Estaba agotado, aislado, jaqueado por todos los flancos. Los partidos políticos tradicionales, teóricamente disueltos, llevaban a cabo en los hechos una activa campaña contra un poder que calificaban de *nazifascista*; la casi totalidad del periodismo estaba en contra; de todas las universidades, recientemente normalizadas, partían duros ataques contra el poder militar; la Argentina estaba aislada del resto de América, y los países aliados, todavía en guerra contra el Japón, consideraban al régimen de nuestro país un eco de los sistemas totalitarios que acababan de liquidar en los campos de batalla de Europa. Farrell, el poco agraciado general que había relevado a Ramírez en la presidencia en febrero de 1944, era destinatario de los más crueles chistes, y hasta el embajador norteamericano, Spruille Braden, se daba el lujo de realizar giras por el interior del país pronunciando discursos que tenían todo el sabor de arengas electorales antigubernistas...

Preocupada por el giro de los acontecimientos, la dirigencia militar se había reunido en julio de 1945 para examinar la posibilidad de conseguir el apoyo de la Unión Cívica Radical, considerada el partido mayoritario. Pero el radicalismo no estaba dispuesto a apuntalar a un go-

bierno agonizante y, por el contrario, se aprestaba a aceptar una unión con los restantes partidos democráticos para ofrecer un frente contra cualquier candidato que pudiera elaborar el oficialismo.

Una realidad nueva

Este supuesto candidato no podía ser otro que el coronel Juan D. Perón, el único militar que, a lo largo de los dos años del gobierno *de facto* había sobrevivido a las diversas crisis y cuya acción al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión despertaba simpatías en algunos sectores de trabajadores. Esta acción, traducida en aumentos de salarios y "estatutos" para diversos gremios, así como en la formación de nuevos sindicatos y la creación de delegaciones de Trabajo y Previsión en todas las provincias, compensaba al gobierno militar de todas las inconsecuencias y errores cometidos a lo largo de su gestión: desde un idilio con los grupos *ultras* del nacionalismo católico hasta la abrupta declaración de guerra a Alemania y Japón en momentos en que ya terminaba la guerra. Estas incoherencias, más las previsibles campañas de moralidad, las cesantías de eminentes profesores y los gratuitos actos de brutalidad policial contra la oposición, todo podía compensarse con la afirmación de la justicia social que Perón expresaba en su política, aun cuando fuera hecha torpe y demagógicamente.

Pero el gobierno *de facto* no acertaba a capitalizar estos aciertos. Se iban venciendo los plazos: en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, realizada el 8 de julio, el Presidente se había comprometido solemnemen-

te a cerrar el ciclo abierto por la revolución del 4 de junio con elecciones libres, exentas de fraudes o presiones oficiales. Y la ovación con que los jefes y oficiales presentes en la comida saludaron esta promesa, era indicio claro del espíritu prevaleciente en las filas castrenses. A medida que pasaban las semanas, el frente opositor se iba consolidando y el oficialismo debilitaba su estructura. En agosto, tres políticos radicales aceptaron integrar el gabinete de Farrell: la cartera del Interior quedaría en manos de J. Hortensio Quijano, un correntino pintoresco y ladino que dentro de la UCR había tenido una mediocre trayectoria pero cuya experiencia parecía habilitarlo para hacer de "puente" a otros aportes partidarios hacia las tiendas oficiales. Por lo pronto, Quijano levantó el estado de sitio y esto fue la señal para que la actividad política cobrara una intensidad y virulencia peligrosas para el poder militar.

Setiembre/octubre de 1945 fue el momento crítico para la salida electoral del gobierno *de facto*. El embajador Braden, llamado a Washington, pronuncia una serie de discursos agresivos; la oposición organiza la Marcha de la Constitución y la Libertad, que resulta una inquietante demostración de fuerza; se produce un conato de insurrección militar en Córdoba. A partir de este momento, el gobierno reinstaura el estado de sitio, se producen centenares de detenciones, los estudiantes ocupan las universidades y son desalojados de allí. Crece inconteniblemente el malestar, se producen tiroteos a lo largo de esos días, tanto en Berisso como en la Capital Federal. Finalmente, el 9 de octubre, la guarnición de Campo de Mayo exige a Farrell el alejamiento de Perón de todos sus cargos y la convocatoria amplia a elecciones: es la derrota del gobierno militar.

Las jornadas que siguieron han sido evocadas muchas veces y el autor de este trabajo también lo ha hecho. Sólo corresponde, para no repetirnos, señalar que los días centrales de octubre de 1945 definieron de un modo drástico e inequívoco el proceso que el gobierno *de facto* no había podido definir desde las alturas del poder: la presencia popular en las calles de Buenos Aires en apoyo de Perón dio a éste la certidumbre de su vigencia y la seguridad de que su postulación electoral contaba con grandes posibilidades de éxito. Repetimos: no fue el gobierno *de facto* el que logró clarificar el panorama político: fue el pueblo del conurbano porteño el que se definió como peronista. Lo único que ahora hacía falta era proveer los cauces políticos de este difuso y fervoroso sentimiento.

Las dos alianzas

Pocos días después del 17 de octubre, un grupo de dirigentes sindicales, muchos de ellos de origen socialista, se reunían en el estudio de un escultor para constituir el Partido Laborista. No tenían mucha experiencia política pero habían pasado la vida en las luchas gremiales y conocían perfectamente a los sectores que representaban. Contaban, además, con el indisimulado apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión: un comité en cada provincia... pero provisto de dinero y poder. A las pocas semanas, el público de Buenos Aires asistía a un insólito espectáculo: unos triciclos que recorrían las calles con un cartelón que rezaba: “Partido Laborista. Una Nueva Conciencia en Marcha”. Era una patriada ese partido que ingresaba al selecto club de los partidos políticos en procura, nada menos, que del premio del poder.

En noviembre se constituye la "UCR Junta Renovadora", integrada con desertores del radicalismo tradicional. Algunas figuras de cierta relevancia local –como Armando Antille de Santa Fe, Miguel Tanco de Jujuy, Alberto Durand de Salta– forman parte de la nueva fuerza, que también integra Quijano y cuyo aporte a la coalición peronista es, básicamente, su *know how* político y algunos capitales personales en el interior del país. Los "renovadores" exaltan la memoria de Yrigoyen y hablan de Perón como el nuevo caudillo que prolongará la acción social y nacionalista del dirigente radical.

Finalmente, durante la campaña electoral que se desata en el verano de 1945/46, aparecen los "Centros Independientes", núcleos generalmente derivados del conservadorismo, que sin hacer mucha bulla se instalan en humildes locales de barrio y encauzan a los simpatizantes de Perón que no han tenido actuación política anterior.

Estos retazos de fuerzas compondrán la alianza que postula a Perón. No se crea, empero, que se trata de un frente débil: por de pronto, el apoyo del gobierno *de facto* le presta una vertebración temible, y esto queda demostrado cuando a fines de diciembre (1945) se impone el decreto 33.302, que exige a los empleadores pagar un "sueldo anual complementario" o aguinaldo, medida que provoca la resistencia de los patrones, finalmente vencida, y un renovado movimiento de apoyo de las masas hacia Perón, inspirador de la medida. Pero además, está el propio Perón.

En ese momento Perón acababa de cumplir 50 años y estaba en el mejor instante de su carrera. Su casamiento con Eva Duarte daba a su persona el mágico halo de una radionovela; su oratoria era precisa, agresiva, atropellado-

ra. Se había apoderado de ideas provenientes de todo el espectro ideológico, y tan pronto se definía yrigoyenista como citaba a Lenin o a León XIII. Rápido, inteligente, con excepcionales condiciones histriónicas, Perón había descubierto su condición de político nato en esos dos años anteriores y ahora volcaba su capacidad, su intuición y su dinamismo a la conquista del poder constitucional, bajo las seductoras banderas de la justicia social, el antiimperialismo y la lucha contra la oligarquía.

Y era lógico que echara mano de todos los recursos posibles y diera la bienvenida a quien quisiera unírsele, porque sus enemigos eran poderosos, teóricamente imbatibles.

La Unión Democrática

Después de las jornadas de octubre quedó claro el frente antiperonista. En un nivel visible y bullicioso lo integraban todos los partidos tradicionales: la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista; el conservadorismo quedó fuera de la alianza porque los radicales no le perdonaban el reiterado uso del fraude en la década anterior, pero casi todos sus dirigentes apoyaban la lucha contra Perón. En otro nivel, menos aparente, figuraban también organismos empresarios como la Unión Industrial y la Sociedad Rural, agrupaciones profesionales como el Centro de Ingenieros o la Bolsa de Comercio, nucleamientos intelectuales y universitarios. Todos los grandes diarios estaban contra Perón y casi todas las radios privadas.

¿Qué bandera levantaba el frente antiperonista? Fun-

damentalmente, la libertad y la democracia frente al nazifascismo encarnado, a juicio de la oposición, en la persona de Perón. Eran principios nobles los de la Unión Democrática; pero en el curso de la campaña electoral una serie de azares hizo que el frente antiperonista apareciera como la expresión de la Argentina Vieja, el intento de retornar a los años anteriores a 1943. Y los argentinos de 1945/46 que vivían la plena ocupación, con la prosperidad de las industrias improvisadas durante la guerra, con el orgullo de haber permanecido neutrales durante casi toda la contienda, con la seguridad de que la producción de nuestros campos era indispensable para los pueblos europeos, no estaban dispuestos a ese regreso. Preferían la aventura que proponía Perón: una aventura en mangas de camisa, expuesta en lenguaje populachero y sintetizada en consignas de fácil repercusión.

Frente a esta realidad política, las respetables figuras de José P. Tamborini y Enrique M. Mosca —los candidatos radicales apoyados por la totalidad de los partidos vinculados en la Unión Democrática— no eran más que fantasmas del pasado, ecos de un país ya superado.

La campaña

Dentro del radicalismo, entre diciembre de 1945 y enero de 1946 se vivieron momentos tensos por las fricciones entre "unionistas" e "intransigentes": aquéllos, proclives a la unión con los restantes partidos, éstos, renuentes a la alianza. Superado el problema, la Unión Democrática salió a la lucha con toda la experiencia política acumulada en décadas de actividad partidaria. Fue un formidable

esfuerzo. Los partidos democráticos movilizaron al país entero, hicieron actos públicos en todas partes, llevaron a sus candidatos hasta los puntos más remotos. El gobierno *de facto* había prometido ser imparcial en el proceso electoral y garantizar los comicios con la presencia de las Fuerzas Armadas, por primera vez en nuestra historia. Fundados en estas seguridades, los dirigentes democráticos llenaron los meses de enero/febrero de 1946 con su prédica, aprovechando el apoyo de la prensa y las facilidades de las radios –las *broadcastings* como se decía entonces.

Las fuerzas peronistas, menos expertas en las lides electorales, tardaron más tiempo en arrancar formalmente: las disputas entre laboristas y renovadores adquirieron, en algunas provincias, visos de batallas campales. En la provincia de Buenos Aires el frente peronista no tuvo candidato a gobernador hasta una semana antes de las elecciones... ¿Qué mucho, si Perón no tuvo compañero de fórmula hasta diez días antes?

Pero Perón suplía la inexperiencia de sus adictos –y la suya propia– con un dinamismo temible. Sus recorridas electorales tuvieron una característica inédita: la compañía de su esposa, hecho que se veía por primera vez en la historia política argentina. Y esa rubia presencia de Eva Duarte, ahora señora de Perón, en el buque que condujo a su marido a las ciudades del litoral o en el tren que lo paseó por el Norte y Cuyo, agregaba un elemento más de atracción a este candidato cuyo nombre repetían obsesivamente, a tiza y carbón, todas las paredes del país.

Tanto la Unión Democrática como Perón lograban enormes concentraciones. Pero en la segunda semana de

febrero –los comicios se realizarían el 24 de ese mes– un regalo de primera clase cayó en manos del candidato laborista. Desde Washington, Braden lanzaba su propia "bomba atómica" contra el gobierno militar de Buenos Aires: el "Libro Azul", una recopilación de acusaciones de nazismo contra el régimen surgido de la revolución del 4 de junio. No perdió Perón un minuto en refutar los cargos: en un acto público que llenó de punta a punta la Avenida 9 de Julio, lanzó una opción decisiva: "Braden o Perón"... Y muchos argentinos, todavía indecisos, vieron en el ex secretario de Trabajo a un representante de la soberanía nacional herida por el intervencionismo yanqui y allí mismo decidieron votar por Perón.

Las elecciones fueron correctas. En verdad, la era del fraude había terminado. Cuando el escrutinio empezó a barajar las cifras, la tensión del país era casi insoportable. Hay que recordar que en aquellos años no había escrutinio provisional sobre la mesa, al terminar la elección, sino que las urnas debían llevarse cerradas ante la Junta Electoral y allí se iban abriendo, controlando y escrutando una por una, día por día, de modo que el inventario electoral duraba semanas, con alternativas de infarto para unos y otros...

Así, las primeras cifras parecieron favorecer a la Unión Democrática en San Luis y San Juan. Pero pronto se evidenció que la mayoría peronista era firme, aun en los distritos donde la oposición descontaba el triunfo, como Córdoba o la Capital Federal. Era indudable, además, que el predominio de Perón era incontrastable en las barriadas obreras y en las comarcas pobres del país. Cuando, a mediados de marzo, terminó el recuento, la Unión Democrática había triunfado en las elecciones presidencia-

les en Córdoba, San Luis, San Juan y Corrientes; Perón había ganado en todos los otros distritos y además, los candidatos peronistas habían triunfado en todas las gobernaciones, menos la de Corrientes. En consecuencia, el futuro gobierno tendría 28 senadores sobre 30 y los dos tercios de la Cámara de Diputados... Un triunfo abrumador, aunque el porcentaje era mínimo: 52% para Perón, 48% para la Unión Democrática. Fue la peor elección que hizo Perón en toda su carrera, pero le bastó para afirmarse inicialmente en un poder que en pocos años sería tan sólido y abrumador como sin ejemplo en nuestra historia.

Una nueva etapa

Cualquiera sea el juicio que merezca la gestión de Perón al frente de los destinos del país entre 1946 y 1955, es indiscutible que su victoria, en febrero de 1946, abrió una nueva etapa en la vida argentina. La ideología de posguerra se materializó en su gobierno, de características nacionalistas y estatizantes, por lo menos en su primer tramo. Un repertorio de ideas nuevas y estimulantes se instaló en el alma colectiva y el país vivió una experiencia novedosa: la del líder en contacto directo con las masas, sin la intermediación de las instituciones y los grupos que antes habían desempeñado dicho rol.

¿Por qué triunfó Perón? O mejor dicho: ¿por qué ese gobierno *de facto* que en el invierno de 1945 estaba desacreditado, vencido, pudo proyectarse en el verano de 1946 de la manera triunfal que las elecciones evidenciaron? Fue un caso único en nuestra historia reciente y merece un estudio más detallado. Pero la respuesta, proba-

blemente, debe atender al espíritu de la época, ansiosa de renovación, de cambios, de figuras y procedimientos nuevos. Había terminado la guerra mundial y la Argentina se aprestaba con buenas perspectivas al nuevo reacomodamiento de fuerzas. Perón representaba ese anhelo: un país autárquico, independiente, liberado de las dependencias y asociaciones que antes lo limitaban; un país que había sacado a flote realidades antes desconocidas, como el proletariado urbano de la industria liviana. Frente a esta perspectiva, sus opositores parecían un retroceso, un paso atrás. Perón aprovechó y expresó esta vocación nueva y con su talante populachero e informal empezó el largo protagonismo político del que todavía hoy no estamos exentos.

el constitucionalista José Nicolás Matienzo. Finalmente, los socialistas independientes, liderados por Antonio Di Tomaso, levantan también el nombre de Justo. He aquí, pues, armada la "Concordancia": el viejo partido conservador fraguando el entendimiento con los disidentes del radicalismo y los que desde 1925 lo eran del socialismo. Un invento político que reedita el frente antiyrigoyenista de 1928 y cuya fuerza es indiscutible en algunos distritos, pero que no puede obtener la mayoría del electorado en elecciones limpias; allí están los resultados cancelados del 5 de abril para evidenciarlo.

Hay dos fuerzas cívicas importantes y con una honorable trayectoria que salen al cruce de la Concordancia. El Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista proclaman el 31 de agosto una fórmula común integrada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Se presentan como "Alianza Civil" y tienen buenas perspectivas en Capital Federal y Santa Fe, pero no en el resto del país, donde el anticlericalismo de ambos candidatos asusta y por cuyas modalidades personales les cuelgan el sobrenombre de la "fórmula del cianuro"...

A dos meses de las elecciones, pues, la franja electoral de la derecha está cubierta por la Concordancia; la de la izquierda, por la Alianza Civil. ¿Y el radicalismo? ¿Qué ocurre con la fuerza que se considera de centro, moderada, representativa de la clase media? La UCR está viviendo una penosa ordalía.

Exiliados sus próceres más conspicuos, la responsabilidad de llevar adelante la reorganización radical había quedado en manos de Adolfo Güemes, nieto del héroe salteño, un solterón activo y enérgico que, venciendo toda suerte de dificultades, logró a fines de setiembre

constituir el Comité Nacional y reunir la Convención Nacional de la UCR. El cuerpo proclama un binomio de guerra: Alvear-Güemes, que significa el enfrentamiento total con el gobierno *de facto*. Alvear, desde Río de Janeiro, renuncia a su nominación para no constituir un obstáculo a cualquier posible solución, pero la Convención insiste en su candidatura. Entonces se traslada a Montevideo para seguir más de cerca los acontecimientos y al desembarcar se entera de que el gobierno de Uriburu ha vetado su nombre y el de Güemes. Las listas de electores "que respondan a las candidaturas de dichos ciudadanos" no serán oficializadas, ni computados los votos a su nombre.

Siguen dos semanas de febriles cabildeos; algunos dirigentes "blandos" hacen gestiones para saber si el gobierno de Uriburu aceptaría candidatos radicales más potables. Pero la estrategia de Justo consiste, precisamente, en que la UCR responda a la provocación gubernativa con una declaración de abstención: excluido el radicalismo, ganarle a la Alianza Civil será juego de niños... Tal como suponía, el Comité Nacional, agotadas todas las gestiones, resuelve el 27 de octubre declarar la abstención en las elecciones del 8 de noviembre. Un vibrante manifiesto, "El Comicio Cerrado", redactado por Ricardo Rojas, explica al país los motivos de la decisión. Una decisión que —como se vio más tarde— conducía al radicalismo a un callejón sin salida. Pero ¡qué otra cosa se podía hacer!

Triunfo de la Concordancia

Ni la campaña electoral fue entusiasta ni el resultado fue materia de especulaciones. La Alianza Civil fue hostilizada por policías bravas y sus candidatos tuvieron problemas en varios puntos del país. Por su parte, Justo, sonriente y tranquilo, "candidato bígamo", como se le llamaba, con sus dos compañeros de fórmula, ya actuaba con talante presidencial... El 8 de noviembre hubo actos de violencia contra opositores en Buenos Aires, Mendoza y San Juan, pero en general los comicios fueron tranquilos: el fraude ya estaba perpetrado con la exclusión de los radicales, que se abstuvieron de votar. El escrutinio no ofreció sorpresas: Justo-Roca obtuvieron 234 electores, sobre 124 de De la Torre-Repetto. La Concordancia tendría mayoría en el Congreso y en ocho provincias. En Santa Fe habían triunfado los demócratas progresistas, en Entre Ríos gobernaban antipersonalistas no adheridos a la Concordancia; los Cantoni volvían al poder en San Juan, y en Tucumán ocuparía el sillón de gobernador un curioso personaje, Juan Luis Nougués, el fundador del Partido Bandera Blanca.

El 20 de febrero de 1932 el general Uriburu, con el rostro ya estragado por su enfermedad, entregaba las insignias del poder al general Justo. No era ésta la solución que había deseado el jefe de la revolución de 1930. Pero tampoco era una buena solución para el país. El triunfo de la Concordancia aparejaba una necesidad cruel, la de dar permanencia al fraude electoral. De este modo, la administración de Justo, progresista en muchos terrenos, quedó marcada con prácticas condenables que la vaciaron de toda autoridad moral e

hirieron gravemente la frágil democracia argentina. En último análisis, la revolución de 1930, aclamada en su momento como una exigencia de saneamiento, había desembocado en una triste repartija basada en la mentira. Y su mayor beneficiario, el conservadorismo, cargaría durante décadas con esta tremenda responsabilidad.

III

1943: EL GOLPE MILITAR

Si la revolución de 1930 fue "cantada" mucho antes de concretarse, la de 1943 ocurrió de un modo súbito y sorpresivo. La de 1930 estuvo rodeada de fervor civil; en 1943 las tropas marcharon desde Campo de Mayo hasta Plaza de Mayo rodeadas sólo de una benévola curiosidad. Pero había otra diferencia, y ésta era básica: el gobierno tumbado en 1930 estaba revestido de legitimidad y funcionaba, bien o mal, dentro de una estricta normalidad constitucional. En cambio, el gobierno volteado en 1943 procedía del fraude electoral y había vaciado su propia legalidad con métodos discutibles que lo llevaron progresivamente a un virtual autoritarismo.

La Concordancia

Desde 1932 había gobernado un sistema político, la Concordancia, basado en el acuerdo entre las dos fuerzas más importantes de la coalición antiyrigoyenista de 1928/30: el conservadorismo y el antipersonalismo. La Concordancia sostuvo la presidencia de Justo, al principio con relativa facilidad, puesto que el radicalismo se abstenía de concurrir a los comicios; en una segunda etapa, a partir de 1935, mediante la instrumentación de un escandaloso fraude electoral, única manera

de triunfar sobre un partido que seguía siendo mayoritario en los distritos más importantes del país.

Ese mismo fraude se reiteró para poner en marcha el segundo turno gubernativo de la Concordancia, en 1938. Los sucesores de Justo eran Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo, antipersonalista el primero, conservador éste, ambos aparentemente identificados con los principios generales de la política concordancista.

Pero aunque su elección estuviera viciada, el nuevo Presidente era profundamente legalista y democrático. Sabía que no podía gobernar indefinidamente sobre el escamoteo de la voluntad popular y se dispuso a limpiar su pecado inicial. Debió romper con sus propios amigos y librar una dura lucha contra los intereses creados alrededor de la Concordancia; pero a mediados de 1940, después de dos años de gobierno, el país veía en Ortiz una gran esperanza de saneamiento institucional. Infortunadamente, en ese momento la salud lo traicionó: una diabetes que arrastraba de años atrás se agravó, traduciéndose en una virtual ceguera. Así, Ortiz debió delegar el Poder Ejecutivo en su vicepresidente y esperar pasivamente una mejoría para continuar la política en que estaba empeñado: una política que no incluía solamente el adecentamiento de la vida cívica sino también la superación de la tradicional antinomia *radical-conservador* y la subsecuente formación de una fuerza política nueva que dejara atrás expresiones políticas que —consideraba Ortiz— ya habían caducado.

No regresó al poder. Su ordalía se prolongó dos años, hasta que debió renunciar definitivamente, rodeado por el respeto del país entero; poco después fallecía. Ya en ese momento (mediados de 1942) la figura que dominaba

cada vez con mayor firmeza el tinglado político era su antiguo vicepresidente, de quien ya hablaremos. Antes es necesario caracterizar esos últimos años de la década de 1930 y primeros de la del '40, que fueron el marco de una profunda transformación del país y condicionaron a las fuerzas que habrían de manifestarse en la revolución del 4 de junio de 1943.

De la crisis al cambio

La crisis que conoció su pico más alto en 1932/33 tuvo como principal característica la caída de nuestras exportaciones: vendíamos al exterior menos productos y cobrábamos por ellos menos divisas (la palabra "divisa" fue un invento posterior, pero significaba lo mismo: oro o monedas fuertes intercambiables). En consecuencia, al recibir menos divisas podíamos importar menos bienes, el Estado percibía menos derechos, la gente tenía menos dinero y todo el circuito económico tendía a achicarse, se hacía recesivo. En 1932 se hizo cargo del gobierno el elenco de la Concordancia, que resolvió afrontar la crisis con criterios que pueden discutirse pero sin duda fueron coherentes en sí mismos y consecuentes con los sectores sociales que representaba.

Así, el gobierno de Justo mantuvo una primera prioridad: preservar nuestras genuinas fuentes de riqueza, es decir las que producían las exportaciones más remunerativas y fáciles de colocar. O sea, la carne. (Desde luego, los beneficiarios de esta prioridad eran los ganaderos de la pampa húmeda, que se expresaban políticamente a través del conservadorismo.) En consecuencia se suscribió el

Pacto Roca-Runciman y se concedieron tratos preferenciales a las inversiones británicas, especialmente a las del área de frigoríficos y transportes, todo en aras del mantenimiento de las exportaciones de carne. También se intentó proteger el valor de la producción agrícola mediante juntas reguladoras que restringieron los cultivos. Paralelamente, el Estado emprendió algunas obras públicas —sobre todo, caminos— para paliar la desocupación, y no vaciló en demorar el pago de sueldos a sus empleados o aceptar que se rebajaran los salarios de algunos sectores obreros; así evitaba la emisión de papel moneda y mantenía invariable el valor del dinero. Lo lograron: no hubo inflación y lo que valía un peso en 1929 seguía valiendo un peso en 1934, pero ¡cómo había que remar para conseguir ese peso!

Era un plan que descargaba el peso de la crisis en los sectores populares, y por lo tanto fueron años de pobreza y desocupación, menos graves que la desocupación y la pobreza que flagelaban a Europa y Estados Unidos, pero de todos modos duramente sentidas en nuestro país, no habituado a estas caídas. Poco a poco, sin embargo, la vitalidad argentina fue aprovechando positivamente algunos de los efectos de la crisis. Podían importarse pocos bienes: entonces el ingenio criollo empezó a improvisar pequeñas industrias textiles, metalúrgicas y de la alimentación para suplir la mercadería que no llegaba de afuera. La miseria despoblaba los campos: los argentinos del interior venían a las grandes ciudades del litoral en busca de mejores horizontes y entonces se empleaban sin grandes pretensiones en esos improvisados talleres; se calcula que desde 1935 unos 100.000 migrantes internos se instalaron cada año silenciosamente en los suburbios de Bue-

nos Aires. Este proceso fue repentinamente activado por la guerra mundial: desde 1939 las importaciones europeas se hicieron difíciles y este proteccionismo inesperado favoreció la incipiente actividad industrial, que en poco tiempo se atrevió a exportar sus primicias, casi siempre caras y malas, pero fundamento, de todos modos, de un profundo cambio de la estructura económica y social argentina. Es cierto que la guerra mundial puso al desnudo la vulnerabilidad del país; de pronto faltaron neumáticos, petróleo, carbón, medicamentos, productos químicos ¡y hasta medias de seda para las damas! Pero estas carencias se suplían de uno u otro modo, y entretanto los granos, los oleaginosos y las carnes —que diez años antes no encontraban mercado en el mundo— eran desesperadamente buscados por las potencias aliadas.

Hacia 1943, pues, ese país de 1932/33 sacudido por la crisis, atado a los azares de su exclusiva producción agrícola-ganadera, que conocía el rostro huraño de las ollas populares y los "barrios de las latas", ese país que había tenido que mendigar a Gran Bretaña la colocación de su producción más importante, ahora era una nación cuya producción industrial superaba en valor a la proveniente del agro, vendía a los precios que quería, vivía un instante de plena ocupación y una euforia desbordante. Y aun se daba el lujo de permanecer neutral en plena guerra desatendiendo las presiones de Estados Unidos y ateniéndose a la política que le dictaban sus propios intereses nacionales.

El Presidente de la soberanía

Animador de esta política desde 1940 era el vicepresidente, que después de la renuncia de su antiguo compañero de fórmula se hizo cargo de la Presidencia de la Nación.

Ramón Castillo era un catamarqueño lacónico y obstinado que había sido juez y profesor de Derecho. Su ingreso a la política fue tardío, después de 1930, cuando ya estaba jubilado de la magistratura judicial, pero hizo una carrera vertiginosa favorecido por una serie de casualidades y ayudado por su prestigio de jurista y su aspecto de abuelito provinciano: breve estatura, piel tono mate y un cabello blanquísimo que combinaba con un bigote no menos albo, que le aparentaban más edad de la que realmente tenía: 67 años al asumir la presidencia.

Conservador por tradición y convicciones, Castillo disentía con Ortiz sobre la conveniencia de una auténtica democracia: prefería tutelar los destinos del país mediante el manipuleo de minorías esclarecidas que lo libraran de la demagogia y el desorden.

Cuando Ortiz delegó el mando, el vicepresidente se movió con suma delicadeza en su poder provisional porque se ignoraba si el enfermo podría retornar pronto a la Casa Rosada. A medida que pasaban los meses Castillo se fue afirmando, desprendiéndose de los ministros anteriores, colocó a sus propios hombres en los puestos clave y cuando, a mediados de 1942, asumió la primera magistratura en plenitud de facultades, ya manejaba con soltura todas las teclas de la política. Pero a un costo terrible: su respetabilidad como gobernante constitucional, porque había regresado (o permitido que se regresara) a las peores prác-

ticas políticas. Las elecciones de Santa Fe, Mendoza y, sobre todo, Buenos Aires de 1940/41 incluyeron toda clase de fraudes y violencias contra la oposición; varios dirigentes radicales fueron asesinados, entre ellos un general retirado. Con Ortiz, los argentinos habían creído posible una restauración de la democracia; con Castillo perdieron toda esperanza, porque el antiguo profesor de Derecho alentaba desembozadamente estos manipuleos, los únicos, por otra parte, que le permitían disponer de un cierto equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Al lado de este vulnerable flanco que significaba su tolerancia al fraude, Castillo era capaz de ejercer una política fundada en los intereses nacionales. Consciente de que la guerra mundial aislaba nuestro comercio, creó un esbozo de flota mercante con algunos barcos de países beligerantes que estaban fondeados en nuestros puertos. Nacionalizó la Compañía Primitiva de Gas al vencer la concesión de la empresa británica que explotaba este servicio, y el puerto de Rosario al expirar la que detentaba una compañía francesa. Alentó los proyectos de algunos militares patriotas que veían la necesidad de intentar la producción nacional de hierro y acero. Pero donde demostró su capacidad de defender a todo trance la política que, a su juicio, consultaba los intereses del país, fue en el campo internacional.

Era Ortiz presidente cuando estalló la guerra mundial, pero Castillo quedó a cargo del Poder Ejecutivo desde agosto de 1940, cuando la caída de Francia parecía prefigurar el inevitable triunfo del Eje. En diciembre de 1941, al producirse el ataque a Pearl Harbour, la Argentina empezó a sentir la presión de Estados Unidos para que declarara la guerra al Eje o, por lo menos, rompiera relaciones. Se-

ría imposible relatar la lucha librada por Castillo para defender la autodeterminación argentina; sólo diremos que el anciano catamarqueño, terco en lo que juzgaba la posición más digna y conveniente, enfrentó toda clase de obstáculos sin declinar la defensa de nuestra soberanía. En una Argentina profundamente dividida entre "aliadófilos" y "pro nazis" –como lo había estado en 1936/39 entre "rojos" y "franquistas"– este hombre aborrecido por los radicales a causa del fraude que apañaba, tildado de "pro nazi" por los socialistas y comunistas, presionado por algunos conservadores para adoptar posiciones más conciliadoras con Washington, carente por origen y temperamento de apoyo popular, comprometido por algunos germanófilos que veían en su neutralidad una supuesta simpatía por el régimen hitlerista, este argentino, "el Viejo Castillo", fue adquiriendo en vastos sectores de la opinión pública el carácter de un símbolo de la soberanía. Reflejaba el estado de ánimo del país en ese momento, sólido y optimista, y tenía el apoyo de un sector que Castillo mimaba: el Ejército.

Ejército y política

Un Ejército sordamente dividido. Muchos de sus jefes y oficiales eran pro aliados, creían que la Argentina debía sumarse a los países que combatían al Eje y apoyaban la perspectiva de una segunda presidencia de Justo. Otros eran pro germanos y apreciaban que así como Gran Bretaña había ayudado a la Argentina a emanciparse de España, una Alemania triunfante podía ayudarnos a sacudir la dependencia británica. Todos temían la influencia comu-

nista y casi todos advertían los sustanciales cambios que se estaban produciendo en el terreno económico y social, y se dolían de la incapacidad de los elencos políticos del oficialismo y la oposición para encauzarlos.

Castillo conocía estas divisiones e inquietudes. En 1940/41 se habían producido alteraciones en algunas unidades militares y bases aéreas, y hasta hubo un conato de *putsch*, rápidamente sofocado. Suponía el Presidente que el apoyo de núcleos nacionalistas del Ejército podía robustecer su poder y ayudarlo a imponer al presidente que habría de sucederlo en 1944. Entonces pactó con ellos y cumpliendo el compromiso contraído disolvió por decreto al Concejo Deliberante de Buenos Aires (un nido de coimas, pero, de todos modos, la institución municipal tradicional), y en diciembre de 1941, también por decreto, impuso el estado de sitio en todo el país. Cuando se le preguntó si la medida había sido adoptada por unanimidad en el acuerdo de ministros, Castillo respondió socarronamente:

–Sí. Por unanimidad de uno: yo, que soy el que manda...

Un Estado cada vez más autoritario mantenido sobre la base del fraude electoral no parecía algo muy sólido, pero Castillo creía en su derecho de imponer el nombre del próximo presidente, que debía elegirse en setiembre de 1943.

La cuestión electoral también agitaba a la oposición: el radicalismo, fallecido Alvear, buscaba integrar un frente con los socialistas, los demócrata progresistas y aun los comunistas; Justo trataba de ser el beneficiario de esta conjunción, pero a los radicales se les retorcían las tripas pensando en esta negra perspectiva. El panorama cambió

en enero de 1943, cuando Justo murió repentinamente: ahora el frente democrático tenía que buscar otro nombre.

Por su parte, Castillo se sintió en condiciones de imponer su sucesor al viejo estilo: con una orden. Enérgicamente, cortó las aspiraciones del gobernador de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, y después deslizó el nombre que guardaba *in petto*: Robustiano Patrón Costas, industrial azucarero cuya imagen –probablemente deformada– era la de un señor feudal del Norte, explotador de sus obreros. Este nombre implicaba que las elecciones presidenciales serían, otra vez, un sucio fraude. Curiosamente, Patrón Costas era proclive a una posición aliadófila. Un interrogante inquietó entonces a los militares nacionalistas: ¿no cambiaría la política de neutralidad de Castillo?

Develada la incógnita oficialista, el frente democrático intentó una jugada magistral: ya que se trataba de encontrar un candidato al que no se pudiera inferir el agravio de un fraude, ¿por qué no proclamar al ministro de Guerra? El general Pedro P. Ramírez representaba al Ejército, y al Ejército, ya se sabe, no se lo corre con matones de comité ni comisarios bravos... Una delegación visitó reservadamente a Ramírez. El ministro no rechazó la idea ni la aceptó. Pero Castillo, enterado de la gestión, exigió un terminante desmentido. El ministro publicó un comunicado tan flojo y ambiguo que el Presidente le reiteró su exigencia y acaso le pidió la renuncia. Era el 3 de junio de 1943, Ramírez fue a Campo de Mayo y relató el episodio a sus camaradas. La reacción fue inmediata: el Presidente agraviaba a todo el Ejército con el despido del ministro. Se resolvió deponerlo. En realidad, el hecho determinante era minúsculo pero había activado varias conspiraciones:

la de los antiguos justistas, la de los pro nazis y la de una misteriosa logia, el GOU, cada una por sus propios motivos.

Tan improvisada fue la decisión, que nadie pensó en el presidente que reemplazaría a Castillo: de hecho, el general Arturo Rawson, aliadófilo, asumió la jefatura del movimiento, lo que más tarde traería algunos problemas.

El 4 de junio a la madrugada Ramírez entregó su renuncia a Castillo y le informó que las tropas de Campo de Mayo iniciaban su marcha para derrocarlo. En la tarde de esa jornada, los militares se habían instalado en la Casa Rosada. Muy pocos de los dirigentes revolucionarios tenían idea del rumbo que podían tomar las cosas, pero todos (y también la mayoría del público) tenían la sensación de que se había clausurado una etapa cuyo anacronismo y vetustez ya eran insoportables, en la medida que había prescindido de las nuevas realidades del país manejándolo como si estuviera medio siglo atrás. Y esto justificó, al menos al principio, este golpe anodino y casi palaciego que tres años después desembocaría en un movimiento popular de insospechable magnitud.

IV

1946: LA SALIDA ELECTORAL

En el invierno de 1945, el gobierno *de facto* surgido dos años antes, buscaba y no encontraba una salida decorosa. Estaba agotado, aislado, jaqueado por todos los flancos. Los partidos políticos tradicionales, teóricamente disueltos, llevaban a cabo en los hechos una activa campaña contra un poder que calificaban de *nazifascista*; la casi totalidad del periodismo estaba en contra; de todas las universidades, recientemente normalizadas, partían duros ataques contra el poder militar; la Argentina estaba aislada del resto de América, y los países aliados, todavía en guerra contra el Japón, consideraban al régimen de nuestro país un eco de los sistemas totalitarios que acababan de liquidar en los campos de batalla de Europa. Farrell, el poco agraciado general que había relevado a Ramírez en la presidencia en febrero de 1944, era destinatario de los más crueles chistes, y hasta el embajador norteamericano, Spruille Braden, se daba el lujo de realizar giras por el interior del país pronunciando discursos que tenían todo el sabor de arengas electorales antigubernistas...

Preocupada por el giro de los acontecimientos, la dirigencia militar se había reunido en julio de 1945 para examinar la posibilidad de conseguir el apoyo de la Unión Cívica Radical, considerada el partido mayoritario. Pero el radicalismo no estaba dispuesto a apuntalar a un go-

bierno agonizante y, por el contrario, se aprestaba a aceptar una unión con los restantes partidos democráticos para ofrecer un frente contra cualquier candidato que pudiera elaborar el oficialismo.

Una realidad nueva

Este supuesto candidato no podía ser otro que el coronel Juan D. Perón, el único militar que, a lo largo de los dos años del gobierno *de facto* había sobrevivido a las diversas crisis y cuya acción al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión despertaba simpatías en algunos sectores de trabajadores. Esta acción, traducida en aumentos de salarios y "estatutos" para diversos gremios, así como en la formación de nuevos sindicatos y la creación de delegaciones de Trabajo y Previsión en todas las provincias, compensaba al gobierno militar de todas las inconsecuencias y errores cometidos a lo largo de su gestión: desde un idilio con los grupos *ultras* del nacionalismo católico hasta la abrupta declaración de guerra a Alemania y Japón en momentos en que ya terminaba la guerra. Estas incoherencias, más las previsibles campañas de moralidad, las cesantías de eminentes profesores y los gratuitos actos de brutalidad policial contra la oposición, todo podía compensarse con la afirmación de la justicia social que Perón expresaba en su política, aun cuando fuera hecha torpe y demagógicamente.

Pero el gobierno *de facto* no acertaba a capitalizar estos aciertos. Se iban venciendo los plazos: en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, realizada el 8 de julio, el Presidente se había comprometido solemnemen-

te a cerrar el ciclo abierto por la revolución del 4 de junio con elecciones libres, exentas de fraudes o presiones oficiales. Y la ovación con que los jefes y oficiales presentes en la comida saludaron esta promesa, era indicio claro del espíritu prevaleciente en las filas castrenses. A medida que pasaban las semanas, el frente opositor se iba consolidando y el oficialismo debilitaba su estructura. En agosto, tres políticos radicales aceptaron integrar el gabinete de Farrell: la cartera del Interior quedaría en manos de J. Hortensio Quijano, un correntino pintoresco y ladino que dentro de la UCR había tenido una mediocre trayectoria pero cuya experiencia parecía habilitarlo para hacer de "puente" a otros aportes partidarios hacia las tiendas oficiales. Por lo pronto, Quijano levantó el estado de sitio y esto fue la señal para que la actividad política cobrara una intensidad y virulencia peligrosas para el poder militar.

Setiembre/octubre de 1945 fue el momento crítico para la salida electoral del gobierno *de facto*. El embajador Braden, llamado a Washington, pronuncia una serie de discursos agresivos; la oposición organiza la Marcha de la Constitución y la Libertad, que resulta una inquietante demostración de fuerza; se produce un conato de insurrección militar en Córdoba. A partir de este momento, el gobierno reinstaura el estado de sitio, se producen centenares de detenciones, los estudiantes ocupan las universidades y son desalojados de allí. Crece inconteniblemente el malestar, se producen tiroteos a lo largo de esos días, tanto en Berisso como en la Capital Federal. Finalmente, el 9 de octubre, la guarnición de Campo de Mayo exige a Farrell el alejamiento de Perón de todos sus cargos y la convocatoria amplia a elecciones: es la derrota del gobierno militar.

Las jornadas que siguieron han sido evocadas muchas veces y el autor de este trabajo también lo ha hecho. Sólo corresponde, para no repetirnos, señalar que los días centrales de octubre de 1945 definieron de un modo drástico e inequívoco el proceso que el gobierno *de facto* no había podido definir desde las alturas del poder: la presencia popular en las calles de Buenos Aires en apoyo de Perón dio a éste la certidumbre de su vigencia y la seguridad de que su postulación electoral contaba con grandes posibilidades de éxito. Repetimos: no fue el gobierno *de facto* el que logró clarificar el panorama político: fue el pueblo del conurbano porteño el que se definió como peronista. Lo único que ahora hacía falta era proveer los cauces políticos de este difuso y fervoroso sentimiento.

Las dos alianzas

Pocos días después del 17 de octubre, un grupo de dirigentes sindicales, muchos de ellos de origen socialista, se reunían en el estudio de un escultor para constituir el Partido Laborista. No tenían mucha experiencia política pero habían pasado la vida en las luchas gremiales y conocían perfectamente a los sectores que representaban. Contaban, además, con el indisimulado apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión: un comité en cada provincia... pero provisto de dinero y poder. A las pocas semanas, el público de Buenos Aires asistía a un insólito espectáculo: unos triciclos que recorrían las calles con un cartelón que rezaba: "Partido Laborista. Una Nueva Conciencia en Marcha". Era una patriada ese partido que ingresaba al selecto club de los partidos políticos en procura, nada menos, que del premio del poder.

En noviembre se constituye la "UCR Junta Renovadora", integrada con desertores del radicalismo tradicional. Algunas figuras de cierta relevancia local —como Armando Antille de Santa Fe, Miguel Tanco de Jujuy, Alberto Durand de Salta— forman parte de la nueva fuerza, que también integra Quijano y cuyo aporte a la coalición peronista es, básicamente, su *know how* político y algunos capitales personales en el interior del país. Los "renovadores" exaltan la memoria de Yrigoyen y hablan de Perón como el nuevo caudillo que prolongará la acción social y nacionalista del dirigente radical.

Finalmente, durante la campaña electoral que se desata en el verano de 1945/46, aparecen los "Centros Independientes", núcleos generalmente derivados del conservadorismo, que sin hacer mucha bulla se instalan en humildes locales de barrio y encauzan a los simpatizantes de Perón que no han tenido actuación política anterior.

Estos retazos de fuerzas compondrán la alianza que postula a Perón. No se crea, empero, que se trata de un frente débil: por de pronto, el apoyo del gobierno *de facto* le presta una vertebración temible, y esto queda demostrado cuando a fines de diciembre (1945) se impone el decreto 33.302, que exige a los empleadores pagar un "sueldo anual complementario" o aguinaldo, medida que provoca la resistencia de los patrones, finalmente vencida, y un renovado movimiento de apoyo de las masas hacia Perón, inspirador de la medida. Pero además, está el propio Perón.

En ese momento Perón acababa de cumplir 50 años y estaba en el mejor instante de su carrera. Su casamiento con Eva Duarte daba a su persona el mágico halo de una radionovela; su oratoria era precisa, agresiva, atropellado-

ra. Se había apoderado de ideas provenientes de todo el espectro ideológico, y tan pronto se definía yrigoyenista como citaba a Lenin o a León XIII. Rápido, inteligente, con excepcionales condiciones histriónicas, Perón había descubierto su condición de político nato en esos dos años anteriores y ahora volcaba su capacidad, su intuición y su dinamismo a la conquista del poder constitucional, bajo las seductoras banderas de la justicia social, el antiimperialismo y la lucha contra la oligarquía.

Y era lógico que echara mano de todos los recursos posibles y diera la bienvenida a quien quisiera unírsele, porque sus enemigos eran poderosos, teóricamente imbatibles.

La Unión Democrática

Después de las jornadas de octubre quedó claro el frente antiperonista. En un nivel visible y bullicioso lo integraban todos los partidos tradicionales: la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista; el conservadorismo quedó fuera de la alianza porque los radicales no le perdonaban el reiterado uso del fraude en la década anterior, pero casi todos sus dirigentes apoyaban la lucha contra Perón. En otro nivel, menos aparente, figuraban también organismos empresarios como la Unión Industrial y la Sociedad Rural, agrupaciones profesionales como el Centro de Ingenieros o la Bolsa de Comercio, nucleamientos intelectuales y universitarios. Todos los grandes diarios estaban contra Perón y casi todas las radios privadas.

¿Qué bandera levantaba el frente antiperonista? Fun-

damentalmente, la libertad y la democracia frente al nazifascismo encarnado, a juicio de la oposición, en la persona de Perón. Eran principios nobles los de la Unión Democrática; pero en el curso de la campaña electoral una serie de azares hizo que el frente antiperonista apareciera como la expresión de la Argentina Vieja, el intento de retornar a los años anteriores a 1943. Y los argentinos de 1945/46 que vivían la plena ocupación, con la prosperidad de las industrias improvisadas durante la guerra, con el orgullo de haber permanecido neutrales durante casi toda la contienda, con la seguridad de que la producción de nuestros campos era indispensable para los pueblos europeos, no estaban dispuestos a ese regreso. Preferían la aventura que proponía Perón: una aventura en mangas de camisa, expuesta en lenguaje populachero y sintetizada en consignas de fácil repercusión.

Frente a esta realidad política, las respetables figuras de José P. Tamborini y Enrique M. Mosca –los candidatos radicales apoyados por la totalidad de los partidos vinculados en la Unión Democrática– no eran más que fantasmas del pasado, ecos de un país ya superado.

La campaña

Dentro del radicalismo, entre diciembre de 1945 y enero de 1946 se vivieron momentos tensos por las fricciones entre "unionistas" e "intransigentes": aquéllos, proclives a la unión con los restantes partidos, éstos, renuentes a la alianza. Superado el problema, la Unión Democrática salió a la lucha con toda la experiencia política acumulada en décadas de actividad partidaria. Fue un formidable

esfuerzo. Los partidos democráticos movilizaron al país entero, hicieron actos públicos en todas partes, llevaron a sus candidatos hasta los puntos más remotos. El gobierno *de facto* había prometido ser imparcial en el proceso electoral y garantizar los comicios con la presencia de las Fuerzas Armadas, por primera vez en nuestra historia. Fundados en estas seguridades, los dirigentes democráticos llenaron los meses de enero/febrero de 1946 con su prédica, aprovechando el apoyo de la prensa y las facilidades de las radios —las *broadcastings* como se decía entonces.

Las fuerzas peronistas, menos expertas en las lides electorales, tardaron más tiempo en arrancar formalmente: las disputas entre laboristas y renovadores adquirieron, en algunas provincias, visos de batallas campales. En la provincia de Buenos Aires el frente peronista no tuvo candidato a gobernador hasta una semana antes de las elecciones... ¿Qué mucho, si Perón no tuvo compañero de fórmula hasta diez días antes?

Pero Perón suplía la inexperiencia de sus adictos —y la suya propia— con un dinamismo temible. Sus recorridas electorales tuvieron una característica inédita: la compañía de su esposa, hecho que se veía por primera vez en la historia política argentina. Y esa rubia presencia de Eva Duarte, ahora señora de Perón, en el buque que condujo a su marido a las ciudades del litoral o en el tren que lo paseó por el Norte y Cuyo, agregaba un elemento más de atracción a este candidato cuyo nombre repetían obsesivamente, a tiza y carbón, todas las paredes del país.

Tanto la Unión Democrática como Perón lograban enormes concentraciones. Pero en la segunda semana de

febrero –los comicios se realizarían el 24 de ese mes– un regalo de primera clase cayó en manos del candidato laborista. Desde Washington, Braden lanzaba su propia "bomba atómica" contra el gobierno militar de Buenos Aires: el "Libro Azul", una recopilación de acusaciones de nazismo contra el régimen surgido de la revolución del 4 de junio. No perdió Perón un minuto en refutar los cargos: en un acto público que llenó de punta a punta la Avenida 9 de Julio, lanzó una opción decisiva: "Braden o Perón"... Y muchos argentinos, todavía indecisos, vieron en el ex secretario de Trabajo a un representante de la soberanía nacional herida por el intervencionismo yanqui y allí mismo decidieron votar por Perón.

Las elecciones fueron correctas. En verdad, la era del fraude había terminado. Cuando el escrutinio empezó a barajar las cifras, la tensión del país era casi insoportable. Hay que recordar que en aquellos años no había escrutinio provisional sobre la mesa, al terminar la elección, sino que las urnas debían llevarse cerradas ante la Junta Electoral y allí se iban abriendo, controlando y escrutando una por una, día por día, de modo que el inventario electoral duraba semanas, con alternativas de infarto para unos y otros...

Así, las primeras cifras parecieron favorecer a la Unión Democrática en San Luis y San Juan. Pero pronto se evidenció que la mayoría peronista era firme, aun en los distritos donde la oposición descontaba el triunfo, como Córdoba o la Capital Federal. Era indudable, además, que el predominio de Perón era incontrastable en las barriadas obreras y en las comarcas pobres del país. Cuando, a mediados de marzo, terminó el recuento, la Unión Democrática había triunfado en las elecciones presidencia-

les en Córdoba, San Luis, San Juan y Corrientes; Perón había ganado en todos los otros distritos y además, los candidatos peronistas habían triunfado en todas las gobernaciones, menos la de Corrientes. En consecuencia, el futuro gobierno tendría 28 senadores sobre 30 y los dos tercios de la Cámara de Diputados... Un triunfo abrumador, aunque el porcentaje era mínimo: 52% para Perón, 48% para la Unión Democrática. Fue la peor elección que hizo Perón en toda su carrera, pero le bastó para afirmarse inicialmente en un poder que en pocos años sería tan sólido y abrumador como sin ejemplo en nuestra historia.

Una nueva etapa

Cualquiera sea el juicio que merezca la gestión de Perón al frente de los destinos del país entre 1946 y 1955, es indiscutible que su victoria, en febrero de 1946, abrió una nueva etapa en la vida argentina. La ideología de posguerra se materializó en su gobierno, de características nacionalistas y estatizantes, por lo menos en su primer tramo. Un repertorio de ideas nuevas y estimulantes se instaló en el alma colectiva y el país vivió una experiencia novedosa: la del líder en contacto directo con las masas, sin la intermediación de las instituciones y los grupos que antes habían desempeñado dicho rol.

¿Por qué triunfó Perón? O mejor dicho: ¿por qué ese gobierno *de facto* que en el invierno de 1945 estaba desacreditado, vencido, pudo proyectarse en el verano de 1946 de la manera triunfal que las elecciones evidenciaron? Fue un caso único en nuestra historia reciente y merece un estudio más detallado. Pero la respuesta, proba-

blemente, debe atender al espíritu de la época, ansiosa de renovación, de cambios, de figuras y procedimientos nuevos. Había terminado la guerra mundial y la Argentina se aprestaba con buenas perspectivas al nuevo reacomodamiento de fuerzas. Perón representaba ese anhelo: un país autárquico, independiente, liberado de las dependencias y asociaciones que antes lo limitaban; un país que había sacado a flote realidades antes desconocidas, como el proletariado urbano de la industria liviana. Frente a esta perspectiva, sus opositores parecían un retroceso, un paso atrás. Perón aprovechó y expresó esta vocación nueva y con su talante populachero e informal empezó el largo protagonismo político del que todavía hoy no estamos exentos.

co. Entre 1948 y 1958 la producción nacional por habitante había descendido un 6% y el 60% del petróleo que se quemaba debía importarse a un costo de u$s 300 millones por año.

Pero además de este panorama de estancamiento, existía una situación mental, un estado de espíritu paralizante. La Argentina se manejaba con consignas anacrónicas, heredadas del peor costado del régimen peronista, que presentaban todo intento de modernización como una maniobra de las minorías oligárquicas de los "vendepatrias" o del imperialismo. Frondizi había contribuido, en alguna medida, a reforzar aquellos lemas de corte ingenuamente nacionalista y estatista durante su actuación opositora y a lo largo de su lucha con la Revolución Libertadora. Pero al llegar al poder rompió con ese pasado y se lanzó a promover soluciones concretas que, en muchos casos, eran lo contrario de lo que había sostenido. Así ocurrió con temas como la extracción de petróleo por empresas contratadas por YPF, la enseñanza privada, la reducción del déficit ferroviario, la descongestión de la burocracia estatal y la solución del viejo problema de la *dieta eléctrica* que afectaba a la Capital Federal y su conurbano.

Jirones de su prestigio fueron quedando en cada una de estas batallas. Pero hacia fines de 1961, después de gambetas prodigiosas que incluyeron, por ejemplo, la designación de Alsogaray como ministro de Economía o el nombramiento en la cúpula militar de jefes que se habían sublevado contra su autoridad, Frondizi podía computar algunos logros indiscutibles en su gestión gubernativa.

Por lo pronto, su publicitada 'batalla del petróleo", que había arrojado un saldo espectacular: el autoabaste-

cimiento del país, obtenido en tres años gracias al crecimiento en un 150% de la producción de hidrocarburos. La producción industrial había crecido en un 10% (entre 1948 y 1958, período tres veces más largo, sólo había aumentado un 16%). La red vial se había extendido en 10.000 kilómetros. La industria automotriz había lanzado 100.000 vehículos en 1961. Doscientos mil empleados del Estado (incluidos ferroviarios) habían abandonado sus puestos para dedicarse a actividades privadas. Se había inaugurado el primer alto horno en San Nicolás y empezado a producir acero en magnitudes industriales. Estaba resuelto el problema de la generación de energía para el conglomerado metropolitano con la creación de SEGBA. Se pusieron en marcha los estudios que culminarían años más tarde en las presas de El Cadillal, Salto Grande y El Chocón, así como los del túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. Habíase extendido a Buenos Aires el gasoducto Campo Durán-San Lorenzo. La plena ocupación era una realidad y comarcas como la Patagonia o Córdoba palpaban físicamente la activación. Pero estos logros no podían ocultar las debilidades de Frondizi.

Desconfianza

En las elecciones de febrero de 1958, la UCRI, el partido de Frondizi, obtuvo una abrumadora victoria debido a los votos peronistas, inhibidos de presentarse autónomamente debido a la legislación proscriptiva de la Revolución Libertadora. El apoyo no duró: a medida que Frondizi profundizaba una política económica que en un primer momento provocó grandes alteraciones, el movi-

miento obrero se fue tornando cada vez más hostil. Al mismo tiempo, sus antiguos correligionarios, los radicales del Pueblo, lo acosaban en el Congreso en una acción que de hecho se combinaba con los sectores *gorilas* de las Fuerzas Armadas y los sectores civiles que seguían fieles a la orientación de la Revolución Libertadora.

Esta formidable coalición hostigó al Presidente desarrollista sin darle respiro: los de derecha lo acusaban de comunista y los de izquierda aseguraban que estaban entregado al imperialismo... En su propio partido, muchos vacilaban frente a las maniobras que instrumentaba el Presidente, y sólo la fe que los dirigentes de la UCRI tenían depositada en él pudo evitar quiebras graves.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, hay que decir que la sucesión de planteos y alteraciones que se fueron sucediendo desde 1958 había acarreado el desplazamiento de los jefes más legalistas; por consiguiente, a principios de 1962, la cúpula de las tres armas estaba ocupada por hombres que desconfiaban profundamente de Frondizi. He aquí, entonces, los dos terrenos peligrosos que en los primeros meses de 1962 debía transitar el gobierno. Peligroso uno por su debilidad política: el 18 de marzo habría elecciones generales en casi todo el país. El otro peligroso por su debilidad militar.

Las elecciones de marzo

La novedad de las elecciones del 18 de marzo de 1962 consistía en que, por primera vez desde 1957, el peronismo podía presentarse a la lucha electoral. Frondizi había prometido terminar con las proscripciones, todos los po-

líticos coincidían con este propósito —al menos verbalmente— y tanto la ley de amnistía sancionada en las primeras semanas de su gestión, como la devolución de la CGT a los trabajadores, concretada en 1960, apuntaban a una intención de reconciliación nacional.

Pero lo cierto es que la campaña peronista, sobre todo en Buenos Aires, tuvo desde el primer momento un tono inusitadamente agresivo. Empezó con la proclamación de una fórmula que incluía al propio Perón. Reemplazado este nombre con el del sindicalista Andrés Framini, las provocaciones se repitieron y agravaron a tal punto que parecía que el peronismo buscaba su propia proscripción. El panorama nacional se complicó aun más en enero/febrero cuando en la VIII Reunión de Cancilleres la delegación argentina se abstuvo de votar la expulsión de Cuba del sistema interamericano. Esta posición fue acompañada por el Brasil, México, Chile y otros países, pero las Fuerzas Armadas la interpretaron como proveniente de un procastrismo vergonzante. Frondizi y su canciller, M. A. Cárcano, debieron explicar que la postura argentina respondía a la necesidad política de no abandonar a Cuba al poder soviético, pero el incidente sólo quedó superado con la ruptura de relaciones con la isla del Caribe. Como había ocurrido otras veces, una lúcida posición de Frondizi, había debido mediatizarse con una concesión que desconcertó a todos.

Simultáneamente, en esos días ocurrió un hecho que no trascendió y que fue conocido hace un par de años por el historiador norteamericano Robert Potash. La inquietud de las Fuerzas Armadas frente a un posible triunfo electoral peronista las llevó a obtener el 29 de enero una declaración secreta del ministro del Interior

comprometiéndose a no permitir el regreso del peronismo al poder. Aunque la existencia de esa acta ha sido cuestionada no puede negarse que algún tipo de seguridades fue dado en ese sentido por Frondizi.

El 18 de marzo se realizaron las elecciones con toda normalidad. Pero cuando se conocieron los resultados, esa misma noche, una sensación de enorme preocupación campeó en todo el país. Analizadas con serenidad, las cifras creaban un panorama político pluralista y lleno de perspectivas. La UCRI, que en meses anteriores había triunfado en Santa Fe, Catamarca y San Luis, ahora se había impuesto también en la Capital Federal, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Formosa. En Mendoza ganaron los conservadores. En Córdoba, los radicales del Pueblo. En Salta, Chubut, Neuquén y Misiones, los "neoperonistas" y en Jujuy los demócratas cristianos. Los peronistas ortodoxos habían triunfado en Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Río Negro y San Juan.

No era una elección catastrófica para Frondizi: significaba, fundamentalmente, que su sucesión tendría que conversarse con otras fuerzas. Pero no se vio así el comicio desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, los partidos opositores, algunos diarios y "el elenco estable del golpismo".

El derrocamiento

Al día siguiente Frondizi suscribió un decreto interviniendo cinco de las provincias donde había triunfado el peronismo, entre ellas Buenos Aires. Es que Buenos Aires

se había convertido en el nudo del problema: la sola idea de que Framini pudiera sentarse en el sillón de Dardo Rocha, la sola imagen de que este sindicalista de aspecto plebeyo y vozarrón agresivo tuviera que recibir honores militares, ponía frenética a la cúpula militar. Nadie pareció tener en cuenta que Framini, como gobernador, tendría que adaptarse a las condiciones de la legalidad: una legislatura donde no tenía mayoría, una opinión pública libremente expresada, una Fiscalía de Estado independiente, que el peronismo demostrara que podía gobernar dentro de un esquema auténticamente republicano; la primera vez desde 1955, que el país antiperonista tenía la posibilidad de respetar a un partido que había estado proscripto hasta entonces. La perspectiva de esta formidable experiencia fue desechada.

¿Por qué intervino Frondizi? Reiteradamente se dijo entonces que las Fuerzas Armadas lo habían conminado a tomar tal medida, entre otras que el Presidente rechazó; que las intervenciones (que no implicaban necesariamente la anulación de los comicios) eran el mal menor frente a la ola de histerismo que obnubilaba en ese momento a las Fuerzas Armadas. Más tarde se afirmó que Frondizi no hizo más que cumplir los compromisos anteriormente asumidos. Sea como fuere, las intervenciones produjeron un profundo malestar en la UCRI, una fuerza que heredaba el legalismo del viejo radicalismo, pero no mejoraron la posición del Presidente al aventar toda posible negociación con los peronistas y desvanecer el respeto que todavía le tenían muchos sectores independientes. En suma, la decisión de Frondizi lo dejó inerme frente a un sentimiento golpista que, lejos de contentarse con este bocado, ahora codiciaba toda la presa...

Fue el comienzo de diez angustiosas jornadas. El Presidente aceptó la renuncia de su ministro del Interior y luego la de todo el gabinete. Llamó a personalidades de otros partidos, pero fuera del aporte de un sector de la Democracia Cristiana, nadie acudió y debió reconstruir su ministerio con gente de la UCRI. A medida que crecía el sentimiento golpista en las Fuerzas Armadas, cedía más posiciones: así, aceptó un plan que lo convertiría en un virtual prisionero de los comandantes en jefe en lo relativo a las decisiones gubernativas, pero finalmente la fórmula fracasó. Como un último recurso convocó al general Pedro E. Aramburu para que mediara ante las Fuerzas Armadas, pero sea porque realmente se sintió impotente o porque se dejó apresar por aquellos que estaban empeñados en el derrocamiento del Presidente, Aramburu se sumó al coro de los que exigían su renuncia.

El 28 de marzo, en horas de la tarde, los comandantes en jefe del Ejército, la Marina y la Aeronáutica se constituyeron en el despacho presidencial para solicitar a Frondizi su renuncia. La respuesta fue negativa. Sugirieron entonces una licencia, o un viaje al exterior. Frondizi rechazó estas insinuaciones. Cercado por todos los flancos, solitario y humillado, al menos cumplía con la línea de conducta personal que había proclamado antes de llegar a la primera magistratura cuando aseguró que no se suicidaría, no renunciaría ni se iría del país... Poco más le quedaba por hacer.

Instalado en la residencia de Olivos, en la madrugada del 29 un comunicado radial hizo saber que los comandantes habían destituido al Presidente. Apenas apuntaba la mañana, despedido por amigos y correligionarios que no ocultaban su emoción, Frondizi fue llevado

en automóvil al Aeroparque y de allí, en breve vuelo, a Martín García. Custodiado por fuerzas de la Marina, habría de permanecer allí hasta marzo de 1963 para pasar luego a Bariloche hasta agosto del mismo año.

Este epílogo no puede invalidar, empero, la significación del gobierno de Arturo Frondizi como intento, el más racional y coherente del último medio siglo, para modernizar al país, proveer de bases firmes a su desarrollo, revestirlo de una personalidad definida dentro del mundo occidental y concretar una superación de las viejas antinomias políticas que han desgarrado a los argentinos. Frondizi lanzó iniciativas que en su momento desataron tempestades y pocos años más tarde fueron pacíficamente aceptadas por todos: caso de las universidades privadas —que en su momento provocaron los épicos enfrentamientos de "libres" y "laicos"— o del sistema de extraer petróleo por medio de empresas particulares. Fue también un adelantado en materia de política internacional respecto de problemas como el de Cuba, por ejemplo, o del entendimiento con el Brasil.

Acaso llegó al gobierno antes de tiempo, con un país hondamente dividido que hizo dificultoso su empeño; y con el agravante de un *handicap* ideológico, el de un pensamiento reiteradamente proclamado, cuya realización era imposible en las condiciones en que se encontraba la Argentina de 1958/62, lo que lo obligó a cambios, contradicciones y maniobras que lo fueron despojando de crédito y debilitaron una acción de gobierno que necesitaba, sobre todo, una gran repercusión popular para poder vertebrarse con apoyos políticos efectivos. En último análisis, a Frondizi no lo derrocó el cinturón industrial del conurbano; lo derrocó el abandono de secto-

res políticos y sociales que debieron haber visto en su programa el proyecto más viable para vertebrar un país reconciliado en la legalidad y el desarrollo dentro de un contexto mundial que se correspondía con estas intenciones.

Frondizi no abandonó la política después de su derrocamiento, pero esto ya es otra historia. Quien escribe estas líneas fue, en aquellos años, su fervoroso partidario. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo puede ver aquel proceso con más objetividad. Pero sigue pensando que el golpe militar de 1962 interrumpió una experiencia que pudo haber adelantado nuestra historia en varios lustros. Sigue creyendo que el derrocamiento de Frondizi fue una tremenda frustración, cuyas consecuencias se padecieron durante mucho tiempo y, en mucha medida, dejó sembradas las semillas de los años terribles que vinieron después.

VIII

1963: LA SALIDA ELECTORAL

El gobierno de Guido es un caso atípico dentro de esta serie. No fue, estrictamente hablando, un gobierno *de facto* ni mucho menos un régimen militar, aunque la legitimidad de su origen fue muy discutible y constituyó un acto de salvación de la República más que un hecho legal. En cuanto al contenido militar de su gobierno: si bien Guido logró sobrevivir a alzamientos provocados por los sectores más extremos de cada una de las armas ("colorados" en el Ejército, setiembre de 1962; Cayo Alsina en Aeronáutica, diciembre del mismo año; insurrección de la Marina, 2 de abril de 1963) también es evidente que las presiones que soportó por parte de los sectores castrenses que lo apoyaban condicionaron la salida electoral que clausuró su gestión.

Dicho esto, deseo rendir un cálido homenaje a la modesta y serena figura de José María Guido, que no buscó el alto cargo que le fue conferido al ser derrocado Frondizi, y que en su desempeño lo honró con su patriotismo y su sensatez.

Hay otra advertencia que hacer: la salida electoral de 1963 es representativa de los prejuicios y pasiones que han erosionado nuestra vida política. Una alternativa perfectamente viable y aceptable —la del Frente Nacional y Popular— fue vetada hasta hacerla naufragar, siendo que posibilitaba una superación de los antagonismos irrecon-

ciliables que habían provocado el fracaso de Frondizi. La eliminación de la opción frentista aparejó entonces el triunfo de Illia, con su escaso 22% de votos, herido por una debilidad política que a la vuelta de tres años facilitaría su derrocamiento.

Y ahora vamos al relato de este complicado proceso.

Prejuicios e irracionalidades

El alzamiento de la Marina, en abril de 1963, se debió a la inquietud que provocaba en el arma —y en otros sectores, civiles y militares— la posibilidad de que el peronismo pudiera presentarse a las elecciones generales que debían cerrar el ciclo de Guido. Concluido el episodio armado, suponíase que todo quedaba allanado para que la salida electoral habilitara alguna forma de participación de la fuerza que estaba virtualmente proscripta desde 1955. Algo había que hacer para normalizar a la democracia argentina. No podía continuar indefinidamente un estado de cosas que mantenía al partido mayoritario excluido de los comicios (como ocurriera en 1958) o que, si permitía su participación, vetaba su triunfo (como sucediera en 1962).

Pero el prejuicio antiperonista era todavía muy agudo. El espíritu de la Revolución Libertadora —mejor dicho, lo peor del espíritu de ella— predominaba en las Fuerzas Armadas, incluso en el Ejército "azul" —vencedor de los "colorados" en setiembre del año anterior— que había salido a la calle con la bandera de elecciones libres. Era una necesidad nacional el regreso del peronismo a la vida cívica, para que dejara de ser un factor de perturbación

como lo fuera a lo largo de los años de Frondizi. Pero se necesitaba un gran esfuerzo de ánimo, tanto por parte de las Fuerzas Armadas que controlaban al gobierno de Guido como por parte del propio peronismo, que no podía aspirar a ser protagonista de una salida incondicional porque simplemente no estaban dadas las condiciones para ello. ¿Sería capaz la dirigencia argentina de semejante esfuerzo? ¿Podría elaborarse una fórmula suficientemente flexible e inteligente como para que el peronismo pudiera retornar a la vida institucional sin que esto significara una catástrofe?

En marzo, pocas semanas antes del levantamiento de la Marina, una fuerza neo-peronista —la Unión Popular— había obtenido el reconocimiento judicial. Quedaba legitimado así el canal jurídico a través del cual el peronismo podía alternar con otras fuerzas políticas y, efectivamente, las negociaciones comenzaron. Lo natural era que los peronistas se entendieran con el partido de Frondizi. A pesar de todos los enfrentamientos ocurridos en 1958/62, la UCRI era la fuerza cívica importante con la que tenía más afinidades. Además, el peronismo no tenía muchas alternativas de alianza si buscaba una vinculación seria, pues la UCRP era fiel a su estrategia de proyectarse sola y los partidos que ofrecían asociarse al peronismo eran pequeños, como el Conservador Popular de Lima o el Demócrata Cristiano que en ese momento lideraba Sueldo. Un entendimiento entre el peronismo y los frondizistas significaba la recomposición del frente electoral de 1958. Corrigiendo los errores cometidos entonces, en condiciones más favorables como las que ofrecía un país que ahora buscaba desesperadamente su normalización, la alianza tenía la seguridad de prevalecer en

los comicios y, mejor aun, de gobernar con una sólida base. Frondizi, confinado por entonces en Bariloche, era vehemente partidario de esta solución, y también lo era, según todos los indicios, el líder justicialista, radicado en Madrid. El problema residía en la viabilidad de este esquema ante los rangos castrenses, pero de todas maneras, en abril y mayo se activaron las conversaciones para concretar lo que espontáneamente dio en llamarse "el Frente Nacional y Popular".

Por su parte, la UCRP, que en meses anteriores había convocado una "Asamblea de la Civilidad" con buenas intenciones pero escasos resultados, resolvió presentarse a las elecciones con su propia fórmula. En marzo se reunió su Convención Nacional: los cordobeses, que en las elecciones de marzo de 1962 habían conquistado la gobernación de su provincia —elección anulada, como todas las otras— obtuvieron el reconocimiento de este esfuerzo con la proclamación de la candidatura presidencial de Arturo Illia, apoyado abiertamente por Balbín.

Un poco más tarde, otra opción electoral apareció en el panorama político: la del ex presidente del gobierno de la Revolución Libertadora, general Pedro E. Aramburu. Su candidatura despertaba simpatías en algunos sectores militares, que veían en Aramburu al hombre capaz de restaurar los valores que a su juicio se habían abandonado desde 1958. Aunque en el Ejército "azul" se susurraba la posibilidad de que fuera el general Juan Carlos Onganía el beneficiario final de una gran conjunción cívica a formalizarse en el colegio electoral o en el Congreso, Aramburu les resultaba aceptable. Con el apoyo del Partido Demócrata Progresista y bajo la sigla de la "Unión del Pueblo Argentino" —una estructura vagamente parecida

al "Rassemblement du Peuple Français" que había organizado de Gaulle años atrás— el ex presidente provisional empezó su nueva carrera política con dinamismo y seguridad.

Un camino difícil

La implementación del frente no era fácil. Había que armar con mucha delicadeza una arquitectura nueva en la que debían convivir sectores que habían tenido duros choques, y había que llevar como candidatos a hombres que no suscitaran la alarma de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, fueran espontáneamente apoyados por el peronismo y los frondizistas, además de otros partidos menores que también se habían adherido a la coalición. Obviamente, el único que podía determinar quiénes serían los candidatos del frente era Perón, "dueño del paquete mayoritario" como dijo un periodista de entonces.

Los nombres más absurdos fueron barajados por distintos observadores e interesados. Pero lo cierto es que en la ocasión, Perón actuó con maestría y hasta con grandeza. El 24 de mayo de 1963 se conoció la *fumata* de Madrid: el binomio del frente lo integrarían Vicente S. Lima y Carlos Sylvestre Begnis. Con veinte años de perspectiva hay que reconocer que la solución del líder justicialista era brillante. Para empezar, ni Lima ni Sylvestre Begnis eran peronistas. Conservador de origen el primero, militante opositor en la época de Perón —al punto que debió exiliarse en Montevideo— dirigía desde 1957 una corriente populista dentro de su partido que terminó separándose del mismo; era (y sigue siendo) un dirigente ducho y

experimentado, capaz de navegar en los procelosos mares de la política sin perder el rumbo. El candidato a vicepresidente era el ex gobernador frondizista de Santa Fe, médico prestigioso y eficaz administrador; con su cabello blanco y su infaltable pipa, era la imagen misma de la respetabilidad y la decencia.

Estos eran los hombres que Perón proponía para encabezar el Frente. Personalmente, eran inobjetables; políticamente, significaban un acierto y podían ser los protagonistas de la difícil transición del *semifacto* de Guido al gobierno democrático con la amplia base que necesitaba el país. Pero en seguida de conocerse estos nombres empezaron las dificultades.

Primero, dificultades internas en el propio Frente. La Convención Nacional de la UCRI había proclamado candidato a Oscar Alende como medida preventiva para el caso de que la alianza tuviera andamiento. Aunque Alende aceptó la postulación condicionándola a "las soluciones de índole nacional y popular que surjan de las instancias naturales del frente", cuando llegó el anuncio de Madrid se sintió amargamente decepcionado. El ex gobernador de Buenos Aires tenía volumen político de sobra, había conducido gallardamente las huestes frondizistas después del derrocamiento de su jefe y aspiraba, con legítimos títulos, a ser el destinatario del esfuerzo frentista. Su decepción fue recogida por muchos de sus correligionarios que, además, no podían digerir el nombre de Lima, vinculado a los fraudes electorales de Buenos Aires en la década del 30. Así pues, cuando la Convención Nacional de la UCRI se reunió para ratificar la fórmula Lima-Sylvestre Begnis, los amigos de Alende no hicieron *quorum*. De inmediato Alende anunció que se

seguía considerando el candidato de la UCRI, cuya división quedó, de hecho, formalizada en ese instante: un sector, fiel a Frondizi y al Frente; el otro, apoyando a Alende en su carrera hacia la presidencia.

La fragmentación de la UCRI tentó entonces a los demócratas cristianos a aprovechar la bolada. ¿Por qué no ofrecer su estructura partidaria para canalizar al peronismo? Una semana antes de las elecciones se anunció la postulación de Raúl Matera, acompañado por Sueldo. De inmediato Perón desautorizó el intento. Pero ya en ese momento el Frente naufragaba gracias a la suma de dificultades lanzadas desde el Ministerio del Interior.

El Frente demolido

El general Osiris Villegas era un distinguido militar, considerado legalista y bien visto por el Ejército "azul". A tal punto, que en la mañana del 2 de abril, mientras el general Benjamín Menéndez lanzaba su proclama instando a derrocar al gobierno de Guido para evitar el regreso del peronismo, y la Marina se plegaba a esta convocatoria revolucionaria, Villegas sufría un atentado que pudo ser mortal. Con un balazo en la nuca, sus agresores lo dieron por muerto. Pero Villegas se restableció y Guido, de acuerdo con el comandante en jefe del Ejército, Onganía, lo llamó al Ministerio del Interior para instrumentar la salida electoral. Era el sexto ministro de esa cartera en un año...

En vez de hacer viable el Frente, Villegas se dedicó a demolerlo. Ya que disponía de la suma del poder político, comenzó prohibiendo a los jueces electorales oficiali-

zar listas de electores que pertenecieran al peronismo. Era virtualmente un veto, pero para evitar cualquier maniobra, la prohibición se extendió a los electores de todos los partidos bajo cuyo rótulo se pretendiera votar por candidatos peronistas. Era imposible para el Frente concretar, en estas condiciones, los nombres que sostenía. Los dirigentes del organismo coordinador de los partidos frentistas solicitaron entonces una audiencia al ministro del Interior: les fue negada. A lo largo de todo el mes de junio, con la fecha de las elecciones —7 de julio— casi encima, el frente veía cerrados sus caminos. La deserción de una parte de la UCRI le restaba fuerzas, la maniobra demócrata cristiana agregaba confusión y la posición del gobierno le presentaba dificultades legales insalvables. Cuatro días antes de los comicios, las "62 Organizaciones" y el Movimiento Justicialista resuelven declarar la abstención electoral; al día siguiente, el organismo coordinador del Frente ratifica esta decisión y difunde un documento acusando al gobierno de haber provocado la ausencia en el comicio de una composición política que pretendía dejar atrás los enfrentamientos del pasado.

A pocas horas de los comicios, nunca un proceso electoral se había presentado tan confuso y enrevesado. La acción de Villegas para provocar la abstención del Frente recordaba lo que había ocurrido en 1931 con el veto uriburista contra la fórmula radical; el saldo de aquella maniobra había sido el fraude electoral que manchó toda la década del 30. La exclusión del Frente en los comicios de 1963 habría de dar lugar, cualquiera fuera el resultado del 7 de julio, a una solución débil y vulnerable.

Pero no veían así el panorama los hombres del Ejército "azul" que sostenían la política de Villegas. Ellos creían

que, así como el veto de 1931 había posibilitado la presidencia de Justo, progresista y ordenada pese a sus máculas de fraude, así también la exclusión del Frente aparejaría la presidencia de Aramburu. Y confiaban en que la figura del ex presidente provisorio, cada vez más robustecida en experiencias políticas, habría de salvar la debilidad de su origen y lograr un período presidencial pacífico. Sin embargo, el nombre de Aramburu estaba asociado, en la memoria colectiva, a un episodio terrible: los fusilamientos de junio de 1956. Aunque en aquella emergencia el entonces Presidente provisorio había actuado con entereza, haciendo lo que creía que debía hacer y asumiendo valientemente toda la responsabilidad por las órdenes impartidas (y aun por las que nunca dio), el pueblo miraba su imagen a través de un velo de sangre. Al margen de esto, el elenco de Aramburu no tenía ningún eco popular y estaba integrado por exponentes del más crudo liberalismo, muchos de ellos con una mentalidad que no había cambiado nada desde 1955...

A su vez, Alende, repudiado por un sector de su partido, se había lanzado a una campaña corta pero intensísima, tratando de convencer tanto a sus antiguos correligionarios como a los peronistas sueltos. Le faltó tiempo para completar su labor proselitista y rearmar una fuerza que en parte había quedado al lado de Frondizi y en consecuencia participaba del propósito abstencionista.

Nueve candidatos había en juego en vísperas del comicio. En la confusión predominante, no había espacio para establecer claramente qué pensaba y proponía cada una de las fuerzas en competencia. Todo era un embrollo inextricable donde los camaradas de ayer se acusaban hoy de traición, se fragmentaba lo que antes había estado

unido, aparecían brotes oportunistas en los campos más inesperados, el gobierno tomaba partido abiertamente sino a favor de alguien, sin duda en contra de algunos. Y todos, además, estaban pendientes de las órdenes de Perón, en busca de algún inesperado beneficiario de última hora.

La sorpresa de Illia

En esas condiciones de deliberada confusión, el electorado hizo lo único que podía hacer: votar la más serena y moderada de las opciones. El 7 de julio, Illia, casi un "tapado", que venía llevando adelante pausada y decorosamente su campaña desde marzo, obtuvo casi 2.500.000 votos; 1.700.000 sufragios en blanco marcaban el destruido perfil del Frente, con aquellos recalcitrantes que se habían negado a apoyar a ningún candidato. Sorpresivamente, después venía Alende, cuya brava lucha le había dado 1.600.000 votos, provenientes en su mayoría de la UCRI, cuyos seguidores —muchos de ellos, al menos— no podían dejar de dar una oportunidad al combativo ex gobernador bonaerense. Aramburu sólo logró juntar 1.350.000 boletas.

Fue un resultado que desconcertó a muchos y dejó atónitos, en primer lugar, a los propios radicales. Pero después del primer impacto, satisfizo a quienes se habían empeñado en vetar la alternativa frentista: finalmente —dirían— Illia llegaba a la Presidencia sin deberle un solo voto a Perón... Era cierto: pero llegaba como una primera minoría que debió recibir en el colegio electoral el apoyo de otros partidos menores para contar con la

mayoría absoluta exigida por la Constitución. Y llegaba con un comicio del que había estado ausente la fuerza mayoritaria.

Nada es gratuito en política. Illia llegó al poder de modo inobjetable, pero la espada de Damocles de un triunfo peronista colgó desde entonces sobre su cabeza. Su base era legítima, pero chica. Su estilo de gobierno fue exclusivista, puramente partidario. No podía ser de otro modo, pues había triunfado sólo con su partido. Pero los tiempos que le tocó protagonizar exigían fundamentos más anchos y perspectivas más amplias, y en esto residió su vulnerabilidad.

IX

1966: EL GOLPE MILITAR

El derrocamiento de Frondizi, en 1962, fue precedido de un nervioso proceso de diez días y tuvo como destinatario del golpe a un hombre todavía joven, activo e inteligente, que maniobró a lo largo de aquellas jornadas con toda la fluidez e imaginación de que era capaz. El derrocamiento de Illia, en 1966, fue un operativo militar sin una motivación inmediata y de rápido trámite; su víctima fue un hombre que parecía un anciano, que no hizo el menor intento de evitarlo y soportó su expulsión con las únicas armas que tenía: el sentido de la dignidad de su cargo y su valentía personal.

Estas no son, evidentemente, las únicas diferencias entre los hechos de 1962 y 1966. Hay, en cambio, una constante en el golpe contra Frondizi y el que derrocó a Illia: la presencia de unas Fuerzas Armadas profundamente politizadas, cuyos jefes creían cumplir una función superior de árbitros de la vida de la Nación.

La legitimidad

Cuando Arturo Illia asumió la Presidencia de la Nación en octubre de 1963, nadie pudo discutir la legitimidad de su mandato. Frondizi había debido su elección al voto peronista; Illia, en cambio, fue apoyado exclusivamente

por su partido, la UCR del Pueblo. Aunque no había obtenido más que el 22% de los sufragios, su condición de primera minoría le valió el espontáneo apoyo de otras fuerzas que se le sumaron para consagrar su elección.

Pero la legitimidad del origen del mandato de Illia se veía reforzada, además, con el proceso que habían vivido las Fuerzas Armadas en 1962/63, durante el interinato de Guido. Ese año, el Ejército había protagonizado el más dramático de sus choques: la lucha entre "azules" y "colorados", culminación de enfrentamientos que venían muy de atrás, cuya conclusión aparejó la designación del general Juan Carlos Onganía como comandante en jefe, vocero de un programa exclusivamente profesional que parecía clausurar la injerencia militar en el terreno político. También la Aeronáutica había vivido su propia ordalía en 1962, con diversas alteraciones y una sublevación que terminó en Córdoba con la detención de los jefes rebeldes por los suboficiales del arma. Y la Marina, por su parte, había pasado por una prueba agobiante: la sublevación de gran parte de sus efectivos en abril de 1963, en oposición a la salida electoral que se anunciaba; la derrota del arma por parte de unidades motorizadas del Ejército generó resentimiento en los cuadros navales, pero también un extendido rechazo frente a cualquier injerencia política ulterior.

Así, pues, Illia llegaba al gobierno ungido por unas elecciones inobjetables (olvidando el veto que excluyó al Frente Nacional y Popular) y con el apoyo de su propio caudal electoral. Pero además encontraba un panorama despejado y tranquilo en esos sectores militares que un año y medio antes habían derrocado a Frondizi, vivido distintos episodios de insubordinación y rebeldía, instru-

mentado una salida electoral y, finalmente, garantizado la entrega del poder a los elegidos por la ciudadanía.

No era, en cambio, tan auspicioso, el cuadro que presentaba el Congreso Nacional. En Diputados existían trece bloques y en el Senado nueve: la bancada radical no tenía mayoría propia y debía negociar con grupos menores para conseguir la aprobación de sus iniciativas. Esta composición era el resultado del sistema proporcional que se había aplicado para la elección de 1963, por primera vez en el país. Tampoco resultaba alentador el panorama sindical. Una nueva figura, la de Augusto Vandor, se proyectaba con una gravitación que amenazaba eclipsar la de Perón, quien desde su exilio de Madrid seguía manejando en gran medida a "Las 62", agrupación peronista que arrastraba a la CGT y marcaba su estrategia. Esta sorda rivalidad no dejaba de convertir al movimiento obrero en un campo de batalla eventual, para dirimir un liderazgo que recaería en quien encabezara una lucha más audaz.

Finalmente hay que señalar que Illia llegaba al gobierno en un buen momento económico, cuando los resultados de la política de reactivación instrumentada desde 1958 daban sus frutos. Buenos auspicios, pues, eran los que rodeaban la gestión que el 12 de octubre de 1963 inició este médico de 64 años, pausado de maneras, un tanto anticuado en su estilo, tranquilizante para un país cuyos sobresaltos parecían cesar ahora con la instalación en el poder de un partido tradicional y respetable, que no prometía transformaciones sustanciales sino una administración correcta y republicana.

La parsimoniosa gestión

Efectivamente, fue así. La trayectoria del gobierno de Illia en materia económica muestra un fuerte impulso en los dos primeros años, que se va desacelerando luego hasta recalar en una situación de neto corte recesivo en el primer semestre de 1966. El crecimiento del producto nacional fue de 10% en 1964 y de 9% en el año siguiente; el consumo *per cápita* alcanzó un aumento del 10% en 1964 y de 9% en el año siguiente; la inflación estaba en 24% en 1963, 22% al año siguiente, 28% en 1965 y 32% en el último año del gobierno radical.

No hubo, entonces, un fracaso estruendoso en la política económica de la administración radical, pero cuando Illia fue derrocado los índices mostraban la inevitabilidad de una crisis a corto plazo que todavía no se notaba en la vida cotidiana.

Tampoco hubo realizaciones espectaculares salvo —si quiere verse así— la anulación de los contratos realizados por Frondizi para la extracción de petróleo. Los radicales habían sostenido la nulidad de estos instrumentos que, bueno es recordarlo, habían concretado en tres años el autoabastecimiento del país en esta materia. El Presidente radical decretó la anulación de los contratos, lo que costó al país entre 150 y 200 millones de dólares en concepto de indemnizaciones, y lo hizo retroceder a su antigua condición de importador de combustibles líquidos.

Hubo, además, una investigación parlamentaria para determinar si habían existido sobornos en la tramitación de los contratos pero la inquisición, de inocultable intención política, se desvaneció sin arribar a ninguna conclusión concreta.

En realidad, la política económica del radicalismo no tuvo características definidas. Pretendió paliar, por ejemplo, el alza del costo de la vida con una Ley de Abastecimientos que reincidía en los controles de precios que venían fracasando desde la época de Perón; o con una ley de "salario vital y móvil" que no se aplicó jamás. Mezcla de estatismo espasmódico y de populismo frenado por una visión pragmática de la realidad, el gobierno de Illia se limitó a administrar lo que ya había, sin evidenciar imaginación para crear riquezas pero sin incurrir en equivocaciones mayúsculas.

Este mismo criterio privó en la conducta que mantuvo el gobierno frente al Plan de Lucha lanzado por la CGT en mayo de 1964. Con el propósito de movilizar a los trabajadores con una estrategia aparentemente combatiente, la CGT, después de plantear una serie de reclamos al gobierno —algunos totalmente vagos o utópicos— puso en marcha la ocupación de unas 1.500 empresas. Lo hicieron con cautela para que no pasaran de actos casi simbólicos, efectuados por pocas horas sin ninguna violencia y cuidando que los grupos más radicalizados no usaran la ocasión para ejercer una gimnasia revolucionaria.

Por parte del gobierno, la reacción consistió en no hacer nada, es decir, enviar los antecedentes de las tomas de fábricas a la instancia judicial, donde dormirían para siempre. Era lo mejor que podía hacerse, y en esta conducta prevaleció la astucia del experimentado político que era Illia, consciente de que el Plan de Lucha no era más que una expresión de las pujas internas del movimiento sindical. Pero la pasividad oficial provocó en algunos sectores de las Fuerzas Armadas una sensación de alarma: no se habló todavía de "vacío de poder", pero no

dejó de pensarse en el inmovilismo del gobierno como un considerable déficit.

En líneas generales, este inmovilismo existía, pero podía transformarse en rápida maniobra de autodefensa en ciertas ocasiones, como ocurrió a fines del mismo año cuando Perón, después de varias fintas, tomó el avión para dirigirse a Buenos Aires. El líder justicialista, presionado por Vandor y otros dirigentes sindicales, se había visto obligado a adoptar esa extrema decisión, llena de riesgos para él puesto que lo colocaría en el lugar de los hechos, donde no podía eludir responsabilidades ni jugar con diversos hilos como solía hacer desde Madrid. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, el gobierno se manejó con rapidez y eficacia: pidió a las autoridades brasileñas que interfirieran el viaje de Perón, lo que así se hizo. Allí terminó este primer intento de retorno; es seguro que el alivio de Illia debe haber sido idéntico al del líder exiliado, que se sintió cumplido ante los suyos con esta salida.

Sin embargo, la interrupción del regreso de Perón no modificaba la sólida existencia del peronismo, apoyado en sus bases gremiales y expresado políticamente en núcleos diversos. En las elecciones de marzo de 1965, las diversas nóminas justicialistas habían reunido 3.400.000 votos, superando ampliamente al partido oficial, que sólo registró 2.600.000.

Estos comicios no habían variado mucho el panorama político, pero constituían una señal fatídica para el futuro del régimen constitucional, pues en marzo de 1967 debían renovarse las gobernaciones de la mayoría de las provincias y el fantasma de Andrés Framini aparecía nuevamente. Triunfando el peronismo en Buenos Aires, ¿se repetiría el proceso que había culminado con el

derrocamiento de Frondizi? ¿Podían las Fuerzas Armadas desgastarse otra vez imponiendo el desconocimiento de la voluntad electoral, tal como ocurriera en 1962? El tiempo, elemento esencial en la estrategia radical de todas las épocas, ahora trabajaba contra el gobierno de Illia; cada día que pasaba iba aproximando a marzo de 1967, con sus nudos indesatables.

Era como una espada de Damocles sobre el gobierno radical que, por otra parte, poco hacía para ampliar las bases de su sustentación política o lanzar alguna iniciativa convocadora.

Algunas equivocaciones contribuyeron a desgastar el inicial prestigio del elenco oficial. Tal ocurrió con el episodio que se vivió con motivo de la intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana, a principios de 1965: la propuesta del presidente Johnson de crear una fuerza interamericana para hacerse cargo de la situación en Santo Domingo fue aceptada por el gobierno de Buenos Aires. Esta decisión provocó una ola de protestas: se la interpretaba como una violación al principio de autodeterminación de los pueblos que históricamente había sostenido la Argentina. Finalmente, Illia dio un paso atrás y nuestro país no participó en la fuerza continental. Pero esta contradicción repercutió en las Fuerzas Armadas, que vieron con amargura a un general brasileño comandando el contingente.

Para rematar, promediando el episodio, el canciller argentino convocó a sus colegas del Cono Sur a una reunión de consulta; no acudió ninguno. El traspié se reiteró en 1966 con una convocatoria, esta vez a nivel de presidentes de América Látina, que ya había fracasado cuando se concretó el derrocamiento de Illia. Y aun debe agregarse,

siempre en el plano internacional, la poco feliz gira del canciller argentino por el Sudeste asiático, rematada por la declaración que formuló en la capital de Vietnam del Sur apoyando la intervención norteamericana y asegurando que el Vietcong ya estaba derrotado...

Dos aciertos hubo en el campo de la política internacional en compensación de estos fracasos. Uno, el reconocimiento de las Naciones Unidas de la condición colonial de las islas Malvinas y la recomendación de iniciar el diálogo con la potencia ocupante; culminaba así una política que todos los gobiernos argentinos venían siguiendo desde 1833 y sólo entonces conseguía su primera victoria. El otro acierto fue la manera prudente con que Illia manejó un sangriento incidente acaecido en la frontera con Chile.

Buscando una "Revolución Nacional"

El tiempo pasaba sin que se modificara la relación de fuerzas existente. Pero a fines de 1965 ocurrió un hecho que, para los observadores avisados, auguraba la caída del gobierno a plazo fijo. La designación de un nuevo secretario de Guerra provocó objeciones de tipo reglamentario por parte del comandante en jefe del Ejército, quien pidió su retiro. El general Onganía era un legalista: mientras estuviera al frente de su arma, los militares no se moverían. Alejado ahora de la conducción, el grupo de generales "azules" que empuñaba los mandos castrenses podía tentarse con una posibilidad que se insinuaba cada vez más claramente: la "Revolución Nacional", una fantasmagoría compuesta por elementos ideológicos heterogéneos,

cuya mixtura exigía indispensablemente dos ingredientes: militares decididos a asumir el liderazgo del país y sindicalistas resueltos a apoyarlos en esta empresa.

El espejismo seducía a muchos: no solamente militares y sindicalistas sino teóricos de la política, tecnócratas, dirigentes de la comunidad, ejecutivos de empresas, periodistas... Entre todos se dibujaba la imagen de Onganía como un hombre de espíritu amplio, capaz de ganar la adhesión popular a través de una convocatoria que reuniera a todos los que pudieran acelerar un proceso de cambio: es decir, se lo imaginaba exactamente al revés de lo que era...

Frente al futuro glorioso que prometía una conjunción de Ejército y pueblo, reedición de lo de 1945 pero sin Perón, la figura de un presidente civil, pueblerino y carente de fascinación, como era Illia, parecía un obstáculo desdeñable. Y no se advertía que si caía Illia, caía la República... Se comparaba el pedestre estilo del radicalismo, su lentitud, sus remedios caseros, con el ritmo alucinante de la década que se estaba viviendo, protagonizada por hombres de la talla de Kennedy, Juan XXIII o De Gaulle; el colorido de los Beatles y el desenfado de las minifaldas, los movimientos de liberación de los antiguos pueblos coloniales, la conquista del espacio... Ante ese mundo en movimiento, ante la formidable visión de la imaginación humana convirtiendo todos los sueños en realidades ¿podía la Argentina seguir limitada a esta experiencia gris y espesa como la que proponían los radicales? Se apostaba desembozadamente al golpe y una revista, "Primera Plana", hacía una encuesta para determinar quiénes estaban a favor y quiénes en contra...

Frente al ascenso de la marea golpista, el Presidente

permaneció imperturbable. A quienes le sugerían tomar alguna iniciativa (un cambio de ministros, por ejemplo, o una reunión con la dirigencia política para comprometerla con la legalidad) les recordaba el caso de Frondizi, cuyas reiteradas concesiones no lo habían salvado de la caída. Illia prefería no ceder nada. Y en efecto, se mantuvo hasta el final dentro del exclusivismo partidario en que se había movido siempre.

El 27 de mayo de 1966 el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Pascual Pistarini, pronunció un discurso que recogía todas las acusaciones que flotaban en el ambiente sobre la ineficacia del gobierno, y señalaba el peligro de un "vacío del poder". No fue sancionado, como se esperaba. Y como esperaba, probablemente, el propio comandante en jefe, para poner en marcha el operativo del derrocamiento presidencial. A lo largo del mes siguiente se aguardaba de un momento a otro el golpe. Una intensa acción psicológica desplegada en ciertos diarios y revistas daba la sensación de que el gobierno estaba paralizado. Los entendidos aseguraban que el derrocamiento de Illia se haría efectivo antes del 9 de Julio, sesquicentenario de la Independencia Nacional, con pretexto o sin él.

El relevo de un alto jefe, ordenado por Pistarini y objetado por el secretario de Guerra, dio el pie necesario. El comandante en jefe desconoció la autoridad del secretario, dispuso la ocupación de los puntos estratégicos de Buenos Aires y envió un oficial para notificar a Illia —que sostenía a su secretario— que las Fuerzas Armadas habían resuelto su derrocamiento. El presidente recibió con desprecio la orden de desalojar su despacho y sólo se alejó en la madrugada del 28 de junio, cuando los sublevados amenazaron enviar fuerzas de seguridad.

No fueron muchos los argentinos que lamentaron la caída del presidente radical: sólo sus correligionarios y algunos espíritus legalistas. Pero aquel hombre de cabeza blanca que subía a un taxímetro en las inmediaciones de la Casa Rosada, llevaba en su persona los harapos de la legalidad violada por la fuerza. Poco tiempo tardaría la ciudadanía en advertir que sin la legalidad ningún emprendimiento político, por seductor que parezca, tiene viabilidad por mucho tiempo.

X

1973: LA SALIDA ELECTORAL

El 25 de Mayo de 1973, un espectáculo asombroso se difundió a través de millones de aparatos de TV. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un presidente militar, vestido de gran gala, entregaba los atributos del poder a su sucesor. Pero en vez del clima solemne y ceremonioso que suele reinar en esta clase de actos, allí había un ambiente formado por gritos hostiles y gestos furiosos: dedos haciendo la "V" de la Victoria formaban un agresivo friso a las figuras que estaban en el estrado. Las imágenes que se transmitían desde la Plaza de Mayo y aledaños mostraban a jóvenes iracundos coreando consignas contra el gobierno que se iba, y jactancias de muertes violentas cometidas y por cometer. Cubriendo la alegría popular por la recuperación del poder, un tono siniestro daba el registro de la jornada.

La derrota

Era la derrota de la Revolución Argentina, más que la del general Alejandro Lanusse: la culminación de los desaciertos iniciados con la gestión de Onganía, llena de mesianismo, autoritarismo y elitismo, que dilapidó en tres años su consenso inicial. Era también la derrota de Levingston, errático e incoherente durante su breve paso

por el poder. Pero fundamentalmente, la jornada del 25 de mayo de 1973 significaba un triunfo: el de Perón, cuyas tácticas imprevisibles habían terminado por enredar toda posibilidad de una salida decorosa al régimen que iniciara su vigencia en 1966 con el derrocamiento de Illia. Una vez más –pero ahora de manera tensa y dramática– quedaba evidenciada la debilidad que aqueja a los gobiernos *de facto* cuando llega el momento de elaborar su continuidad constitucional.

Nunca se había hablado desde las esferas oficiales de una salida electoral, en los años de Onganía. El primer presidente de la Revolución Argentina se había limitado a afirmar que su tiempo se dividiría en tres etapas: primero la económica, luego la social y después, al final de todo, la etapa política. Ignoraba que el tiempo de todo gobierno es siempre político, y que ni el más obstinado voluntarismo puede fragmentarlo según los gustos del gobernante de turno. Esto quedó demostrado brutalmente cuando el *cordobazo* (mayo de 1969) hizo tambalear el valor que la Revolución Argentina había preservado más celosamente: el orden. Un año después, en vísperas del secuestro de Aramburu y paralelamente a una escalada terrorista sin precedentes, en una reunión mantenida con unos cincuenta generales en actividad, su destino político quedó sellado: las Fuerzas Armadas se negaban a renovar a Onganía el "cheque en blanco" que le habían extendido cuatro años antes.

Pero el tono del proceso *de facto* no mejoró con la presencia del general Levingston en la primera magistratura. El ex jefe de Inteligencia del Ejército "azul" no estaba convencido del fracaso de la Revolución Argentina y a medida que pasaban los meses, como esos personajes de

Borges que terminan siendo "el otro", cada vez se parecía más a Onganía, aunque sin la virtud del laconismo. Cuando en marzo de 1971 lo relevaron y asumió la presidencia el general Lanusse, ya estaba echada la suerte del régimen iniciado en 1966. Difícilmente podría instrumentar su tercer titular una salida propicia. La violencia campeaba en todo el país, los grupos terroristas habían calado profundamente en el peronismo y el régimen no había hecho un solo aliado: por el contrario, había ahuyentado a sus posibles apoyos. A los sectores intelectuales y de clase media, por la intervención a la Universidad y la absurda censura impuesta; a los obreros, por la rigidez con que se acogieron sus reclamos; a los hombres del campo, por las retenciones a las exportaciones; a los políticos, por los proyectos corporativistas de Onganía y los hurtos de dirigentes que había pretendido practicar Levingston en perjuicio de los partidos.

Para agravar la situación del régimen que entraba a conducir Lanusse, estaba Perón. Jefe de un partido que jamás le pediría explicaciones, que aceptaría todo lo que su líder ordenara, Perón jugaba su juego desde Madrid con varias ventajas. En primer lugar, el fracaso del gobierno militar, que ahora hacía desear cualquier cosa que fuera contraria y distinta a él. En segundo lugar, porque un proceso muy curioso lo había convertido en el ídolo de la izquierda, la garantía de los empresarios, la esperanza de los jóvenes, el alborozo de los trabajadores... ¡todo al mismo tiempo! Además, Perón estaba lejos y entonces podía hacer lo que hacen los comandantes que mandan a distancia del teatro de operaciones: echar la culpa a los elementos operativos cada vez

que el plan falla. Y una última ventaja, tal vez la más importante: su total carencia de escrúpulos políticos, que le permitía alentar al terrorismo de las "formaciones especiales" y al mismo tiempo hablar de la necesidad de ponerse de acuerdo con los otros partidos, guiñar el ojo a los enviados del régimen militar y contemporáneamente decapitar a quienes avanzaran demasiado en los contactos con las Fuerzas Armadas, bendecir a los dirigentes sindicales y entretanto aprobar las amenazas contra la "burocracia sindical". La experiencia de su largo exilio daba a las acciones de Perón una inasible versatilidad que desconcertaba a todos y le permitía adoptar las estrategias más sorprendentes.

Lanusse intentó remontar todas estas desventajas con una buena dosis de optimismo e imaginación, contando con la sagacidad de Arturo Mor Roig, un prestigioso dirigente radical que renunció a su partido para acompañarlo en la aventura.

Escaso tiempo tenía el nuevo presidente para intentar salvar lo que quedaba de la Revolución Argentina, porque su llegada al alto cargo lo comprometía a abrir la actividad política y convocar a elecciones en un plazo razonablemente breve. Por otra parte, a diferencia de sus dos antecesores, sus actos eran compartidos con los comandantes en jefe de la Armada y la Fuerza Aérea. A pesar de estos condicionantes, Lanusse hizo bravamente todo lo que pudo para mostrar una diferenciación con sus antecesores. Archivó la doctrina de las "fronteras ideológicas" y cambió visitas con gobernantes americanos de cualquier signo político, trató de reimplantar el sistema de convenios colectivos de tra-

bajo, rebajó la gravitación del Ministerio de Economía mediante el sencillo expediente de suprimirlo y permitió una amplia libertad de expresión. Adoptó, de acuerdo con su temperamento personal, una modalidad campechana y abierta que contrastaba con el retraimiento de Onganía o el exasperado gesto de Levingston. Y por sobre todo, se lanzó a componer una salida política propia, bajo el nombre de "Gran Acuerdo Nacional".

El GAN

Nunca se explicó con claridad en qué consistiría el GAN. Se abundó, sí, en buenas razones sobre la conveniencia de establecer un acuerdo para que la salida electoral no fuera un "salto al vacío" y el futuro gobierno estuviera apoyado por los partidos, al menos los más importantes, de modo que el primer período subsecuente al *facto* dispusiera de la tranquilidad y el apoyo necesarios para ir restableciendo el juego normal de las instituciones. Excelente idea, pero ¿cómo llevarla a cabo? Y sobre todo ¿qué figura podía garantizar y al mismo tiempo ser la beneficiaria del GAN? Si esta figura era Lanusse, no se entendía por qué Perón y la UCR habrían de aceptarla. Si no era Lanusse, ¿para qué el GAN?

Los meses que restaban de 1971 pasaron entre fintas y declaraciones ambiguas, de una y otra parte. Se sabía que había contactos indirectos entre Madrid y la Casa Rosada pero nada concreto podía establecerse. En setiembre ocurrió un hecho sensacional que, aunque fue vaciado de todo contenido político, no dejó de ser un

elemento más en esa compleja pulseada: la devolución del cadáver de Eva Perón al líder justicialista, después de 17 años de ocultamiento en un cementerio italiano. Un mes más tarde, dos unidades del Ejército se sublevaron, pero bastó la intimación del comandante en jefe para que los insurrectos, nacionalistas, se rindieran. Fue tal vez el momento en que Lanusse demostró mayor fuerza: podía permitirse un gesto cristiano y generoso hacia Perón, y también podía demostrar el control que ejercía sobre su arma. Sin embargo, a principios de noviembre una decisión de Perón patentizó a los observadores la inminencia de un endurecimiento por parte de Madrid: el delegado personal del jefe justicialista, Jorge D. Paladino, fue desplazado, y en su reemplazo se designó a Héctor Cámpora, notorio por su incondicional adhesión. Si Perón echaba mano de Cámpora —comentaron los analistas— era porque a partir de ese momento la lucha sería frontal...

De todos modos, entre conjeturas y rumores en el plano político, una cruel escalada de violencia se desplegaba a lo largo de todo el país. A partir del asesinato de Aramburu (junio de 1970) grupos terroristas bajo diversas siglas activaban una horrible secuela de asesinatos, secuestros, chantajes y robos. Esta actividad era bien vista por Perón, que la alentaba como una manera de hostigar al régimen militar; pero lo asombroso es que no provocó una condena expresa por parte de los partidos tradicionales. Así se iban preparando las masacres que habrían de ensangrentar los años posteriores.

Finalmente, en el invierno de 1972 se evidenció que el GAN había fracasado. López Rega, el extraño personaje que ya no se despegaba de Perón, vendió a una re-

vista italiana las cintas grabadas de una conversación que un militar en actividad vinculado a Lanusse había mantenido con el jefe justicialista meses antes; la publicación de la entrevista obligó al gobierno a dar a conocer la totalidad de la charla. El episodio significó la ruptura definitiva de toda negociación: semanas más tarde, en una exposición realizada en el Colegio Militar, el Presidente se refirió a Perón en términos despectivos, lo desafió a regresar al país y aseguró que si no venía era porque "no le da el cuero". Casi contemporáneamente se había constituido en Buenos Aires la conjunción de peronistas, desarrollistas y conservadores populares, con alguna fuerza menor, bajo el rótulo de FRECILINA (Frente Cívico de Liberación Nacional) nombre con sonoridad de antibiótico que meses después sería reemplazado por el de FREJULI (Frente Justicialista de Liberación).

Las líneas estaban ahora tendidas definitivamente, pero muy pocas barajas quedaban en el mazo de Lanusse.

El retorno

El 17 de noviembre, después de diecisiete años de ausencia, Perón pisaba tierra argentina en el Aeropuerto de Ezeiza, acompañado de un heterogéneo cortejo y en medio de un impresionante dispositivo militar que impidió el acceso de centenares de miles de adictos. Su decisión de retornar consternó al gobierno: más aun, lo descolocó. Durante el mes escaso en que permaneció en el país, el gobierno de Lanusse casi desapareció del escenario y el centro de la atención política se concentró en

el chalet de Vicente López adquirido por sus fieles. Allí recibió a todos los dirigentes políticos importantes, y a pocas cuadras de su casa presidió una desordenada reunión que dejó afirmada la vigencia del FREJULI. También debió arbitrar las discrepancias, cada vez más hondas, de sus partidarios, especialmente entre los dirigentes sindicales y los activistas juveniles. En el ajetreo de esos días, sus visitantes no dejaron de observar la influencia que ejercían en el espíritu del anciano líder, su esposa y su secretario.

Pero cuando Perón abandonó el país el 14 de diciembre, de manera casi sorpresiva, ya había definido la fórmula que sostendría el FREJULI, proclamada al día siguiente: Cámpora-Lima, un binomio que parecía alentar las corrientes izquierdistas del peronismo. Un mes atrás, la UCR había nominado a Balbín-Gamond y la carrera electoral ya se había largado. El GAN estaba definitivamente muerto y sólo quedaba a Lanusse una perspectiva casi póstuma: comprometer a las Fuerzas Armadas en una declaración que estableciera ciertas pautas mínimas para cumplir durante el futuro período constitucional, sobre todo en relación con los guerrilleros procesados y condenados, cuya amnistía no debía concretarse de ninguna manera. Este compromiso y el sistema electoral de doble vuelta eran los únicos reaseguros que le quedaban al gobierno *de facto*, abrumado por la campaña más agresiva y amenazante de que exista memoria en la Argentina. En los actos del FREJULI se coreaban consignas como "estos son los montoneros que mataron a Aramburu", se prometía el "paredón" a los militares y se juraba vengar a los dieciséis guerrilleros masacrados en Trelew en un intento de fuga realizado en agosto de 1972.

El 8 de febrero de 1973 apareció un documento firmado por la casi totalidad del generalato en actividad: señalaba la necesidad de sostener las libertades garantizadas por la Constitución durante el futuro régimen *de jure* y la imposibilidad de amnistías indiscriminadas. ¿A quién podía conmover esta declaración? ¿Quién podía prever lo que ocurriría después de la entrega del poder?

Porque a escasas semanas del comicio ya no se discutía quién sería el ganador: se apostaba a si el FREJULI obtendría o no el 50% de los votos en la primera vuelta. El panorama electoral era, aparentemente, múltiple. Además del FREJULI y la UCR se presentaba Francisco Manrique al frente de un conjunto de partidos centristas, Oscar Alende presidiendo una alianza de izquierda y Julio Chamizo sostenido por el partido de Alsogaray. La alternativa extraña estaba encarnada en Ezequiel Martínez, un brigadier que había sido funcionario del gobierno hasta poco antes (y como tal, desconocido por el público) que inesperadamente fue catapultado como candidato de algunas fuerzas provinciales y cuya postulación parecía el melancólico eco del difunto GAN.

Pero esta multiplicidad escondía una cerrada opción: FREJULI o UCR. A esa altura de la evolución política se había generalizado una creencia en segmentos del electorado independiente: que ante la violencia actual, la única forma de detenerla en el futuro era votando al FREJULI. Todas las variantes se habían ensayado desde 1955 y todas habían fracasado. ¡Qué gobernaran, entonces, los peronistas! En resumidas cuentas, se habían ganado la victoria. Ahora les tocaba a ellos: que la autoridad de Perón impusiera el orden y la paz. ¡Qué cruel dilema el de las Fuerzas Armadas! Tendrían que entregar el poder a

los peronistas —a quienes habían echado en 1955—, o a los radicales —a quienes habían expulsado en 1966... Habían derrocado a Frondizi por no tolerar que perdiera la provincia de Buenos Aires; ahora entregarían la Presidencia de la Nación...

El 11 de marzo el electorado argentino concedió el 49,59% de sus votos al FREJULI. El radicalismo hizo una de las peores elecciones de su historia: 21,30%. La sorpresa fue Manrique, que arañó el 15%. Los otros postulantes recogieron cantidades menores al 10% de los votos. No hubo segunda vuelta, por desistimiento de la UCR.

Había triunfado, pues, el peronismo, en las primeras elecciones generales a las que pudo presentarse desde 1954. Y aunque el FREJULI estaba integrado también por el desarrollismo, el conservadorismo popular y un sector de la democracia cristiana, era obvio que sería el peronismo, con sus agonías internas, su dependencia de la persona de su líder y su escasez de equipos de gobierno, el que definiría el futuro del país.

El intervalo que corrió hasta el 25 de mayo prefiguró lo que vendría después. Siguieron los atentados de los grupos terroristas y la izquierda peronista se afirmó en torno al presidente electo. No hubo contactos serios entre los que se iban y los que llegaban; sólo una tensa entrevista, el 3 de mayo, en la que los futuros ocupantes de la Casa Rosada se negaron a adelantar opinión sobre diversos asuntos de Estado y restaron importancia a la acción terrorista. Después, una catarata de hechos se desencadenó sobre la estupefacción del país: liberación de los terroristas detenidos, viaje del nuevo gobierno en pleno a Madrid, malhumor de Perón, masacre de Ezeiza, renuncia de Cámpora.

Dijimos que a pesar de las previsiones legales no hubo segunda vuelta en la elección presidencial de marzo. En realidad, la hubo, pero de una manera muy diferente a la que había supuesto Mor Roig. Fue el 23 de setiembre de 1973, cuando una mayoría aplastante (7.360.000 sufragios, equivalentes al 61,85% del electorado) consagró presidente a Perón. El líder justicialista tenía en ese momento 82 años y su vicepresidente era su propia esposa, lo que no parecía constituir una solución definitiva al tema de la estabilidad institucional.

Y en efecto, el país habría de vivir horas muy amargas en los años siguientes. Ni las peores pesadillas de Onganía podrían haber dibujado el triste desenlace de la Revolución Argentina. Ni los argentinos más pesimistas podrían suponer el camino de sangre y desorden que estaba por transitar aquel pueblo que el 25 de mayo de 1973, entre el alborozo y el rencor, despedía a Lanusse y con él, aparentemente, toda posibilidad de retorno de un régimen militar.

XI

1976: EL GOLPE MILITAR

En la segunda quincena de diciembre de 1975 ocurrieron dos hechos que definieron con dramática elocuencia la situación que vivía el país.

El primero sucedió el 18 de diciembre y tuvo como escenario el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y la Base Aérea de Morón. Un grupo de jefes aeronáuticos detuvo al comandante en jefe del arma y "copó" ambas unidades. Horas más tarde, algunos aviones sobrevolaron Buenos Aires y arrojaron volantes firmados por el brigadier Jesús Orlando Capellini como "comandante de la Fuerza Aérea en Operaciones", en los que se consideraba "agotado el actual proceso político que ha devastado al país" y se resolvía "desconocer a las autoridades que detentan el gobierno nacional". Otros textos, arrojados posteriormente, manifestaban la decisión de "operar hasta el derrocamiento de la autoridad política y la instauración de un nuevo orden de refundación con sentido nacional y cristiano".

El movimiento persistió hasta el día 23. Después de diversas gestiones, los oficiales rebeldes se reintegraron a sus puestos sin ser sancionados, y se reemplazó al comandante en jefe del arma.

El otro hecho se produjo en la madrugada del día siguiente, el 24 de diciembre. Un número indeterminado de extremistas, fuertemente armado, lanzó un ataque en

regla contra un arsenal del Ejército ubicado en Monte Chingolo, entre Buenos Aires y La Plata. El Regimiento 7 de Infantería, aviones y helicópteros de Aeronáutica, efectivos de Marina y personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires debieron acudir apresuradamente al lugar. Después de una intensa batalla de varias horas, los atacantes fueron derrotados; entre 60 y 100 extremistas perdieron la vida. Fue el alarde de fuerza más importante del ERP —en realidad, algo parecido a un suicidio colectivo— que confirmó la temible potencia de fuego y la audacia de las organizaciones subversivas.

Empezaban los últimos tres meses del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

De la fiesta al caos

En 1975 el país involucionó en relación con años anteriores. El PBI descendió un 1,4% y se preveía para el año siguiente un descenso del 6%. El PBI *per cápita* había bajado un 3%. A fines de 1975 el salario real estaba una cuarta parte más bajo que el nivel que tenía cuando empezó el gobierno justicialista, en mayo de 1973. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976, la totalidad de la emisión de billetes se multiplicó catorce veces. El dólar, que en mayo de 1973 tenía un valor convencional de 1.000 ($ m/n), en diciembre de 1975 estaba en 35.000. Si el ritmo de inflación se mantenía a lo largo de 1976 con la tasa a que había llegado en marzo, ese año el nivel de los precios superaría un 4.500%; lo ponemos en letras: cuatro mil quinientos por ciento... Solamente en el año 1975 la inflación había aumentado un 334,8% según información oficial.

Pero el desastre económico del régimen presidido por María Estela Martínez era sólo una parte del cuadro que ofrecía la Argentina a fines de 1975 y, como la mayoría de las cosas que estaban ocurriendo, no era sino una secuela de la pesada herencia que había dejado Perón. La política de José Gelbard, aquella de la "Inflación Cero" y la "Argentina Potencia" con sus pactos sociales y sus concertaciones de precios y salarios, no había podido sofocar un proceso económico de desintegración que reventaba toda limitación. Gelbard renunció tres meses después del fallecimiento de Perón. Pero sus sucesores no acertaron a elaborar una política de contención ni a reparar el desorden del manejo del Estado. El déficit estatal parecía incontenible: entre principios de 1973 y fines de 1975, el total de agentes del Estado aumentó en 24%; compárese este aumento, en dos años, con el 7% que había tenido en diez años, entre 1961 y 1971, el elenco burocrático. Ni siquiera el "rodrigazo", con su devastadora devaluación y sus terroríficos aumentos de tarifas, pudo sincerar una economía que a fines de 1975 estaba fuera de todo control razonable.

Era, repetimos, sólo una parte del cuadro. Otro fragmento de este oscuro paisaje estaba teñido de rojo con la acción de las organizaciones terroristas, de diverso signo ideológico pero idéntica devoción por la violencia, mesianismo, intolerancia y crueldad. Este horror también era, en gran parte, una herencia de Perón, que anteriormente había mimado a sus "formaciones especiales" y luego se había distanciado de ellas hasta anatematizarlas, pero sin poder desmontar su fuerza. El ERP y Montoneros asediaban ahora al gobierno de María Estela Martínez; los secuestros, golpes de mano y asesinatos creaban una

sensación de inseguridad colectiva. Las Tres A, creación de López Rega, junto con diversos grupos de ultraderecha, hacían lo suyo, por su parte. Frente a esta virtual guerra civil, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas eran casi impotentes, salvo en Tucumán, donde la guerrilla rural estaba sufriendo golpes graves. Un cálculo siniestro: en 1975 se producían tres muertes diarias por motivos políticos, es decir que cada ocho horas un argentino perdía la vida violentamente.

El desorden era inocultable en los altos niveles del Estado. Los ministros del Poder Ejecutivo aparecían y desaparecían vertiginosamente, sin tiempo para planear, siquiera, una acción coherente. Formaron esta calesita 38 ministros en 20 meses de gobierno... Diversas influencias tironeaban a los titulares de responsabilidades públicas: los dirigentes de la CGT, por ejemplo, participaban en los acuerdos de ministros y colocaban o vetaban a los altos funcionarios. El bloque oficialista del Congreso se había fragmentado, en reflejo de lo que ocurría en el seno del Partido Justicialista, resquebrajado en fracciones que se combatían ferozmente sin atinar a adoptar una conducta que diera sustentación a la Presidenta.

La personalidad de María Estela Martínez también formaba parte del cuadro agónico de la Argentina de fines de 1975. Errática e influenciable, la Presidenta no se había recuperado del golpe más fuerte que sufriera desde su asunción a la primera magistratura: la separación de López Rega, ese personaje siniestro y a la vez grotesco, del que tuvo que desprenderse a mediados de 1975. Desde entonces, la viuda de Perón había pasado por estados de ánimo que iban desde la euforia hasta la depresión, pasando por la histeria y las vanas furias. Una licencia que

se tomó en setiembre de 1975 pareció preludiar su renuncia, la única solución para evitar la caída del sistema. Pero no fue así. Poco después tomaban estado público sus manipuleos de los fondos de la "Cruzada de la Solidaridad" y su imagen, inspiradora más de compasión que de ataques, hasta ese momento, quedó definitivamente pulverizada. El personaje más conspicuo de la oposición, Ricardo Balbín, había dicho poco antes del fallecimiento de Perón que estaba dispuesto a apoyar la legalidad "con polleras o con pantalones". Pero era cada vez más difícil apoyar una legalidad que se encarnaba en esa pobre mujer exhausta y desconcertada. Ella, más que nadie, era una herencia que Perón había legado al país, envuelta en el 62% de los votos obtenidos en setiembre de 1973.

¡Qué diferencia entre esa Argentina que había votado a Perón esperando que el anciano líder fuera una garantía de paz y orden, con esa Argentina de fines de 1975 marcada por el miedo y la inseguridad! La fiesta había terminado y alguien tenía que pagar las cuentas... Había una sensación de disgregación inminente. Y un ambiente tétrico que se percibía físicamente: cada ciudad argentina registraba estallidos de bombas, secuestros, atentados, tiroteos, raudos automóviles con tipos descaradamente armados que podían ser guerrilleros, custodios, mercenarios al servicio de cualquier organización o policías...

Los dos sucesos acaecidos en la segunda quincena de diciembre de 1975 que hemos destacado al principio reflejaban, pues, el estado del país en aquel momento. Pero puede agregarse un tercero, producido también en esos días: el pedido de intervención a la provincia de Buenos Aires formulado por las "62 Organizaciones" lideradas por Lorenzo Miguel, para destruir al gobernador Victorio

Calabró, su rival en el gremio metalúrgico. La política sindical enredaba la política nacional, la complicaba y la tomaba aun más sórdida e incomprensible. Y un cuarto hecho, todavía, cargado éste de implicancias concretas: la arenga de Nochebuena pronunciada en Tucumán por el comandante en jefe del Ejército, general Jorge R. Videla, que entre otras cosas había reclamado "una inmediata toma de conciencia para definir posiciones" y exigido que "la inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas".

En los círculos políticos y en los mentideros periodísticos se aseguraba que la alocución de Videla contenía un mensaje secreto, un ultimátum: "aquellos que deben adoptar las decisiones que solucionen los problemas del país" tenían exactamente noventa días de plazo. Vencido el plazo sin que se vieran perspectivas de mejora, las Fuerzas Armadas tomarían el poder. Noventa días: el 24 de marzo de 1976.

Agonía y derrumbe

Lo que siguió fue una agonía vivida sin grandeza por parte de un elenco dividido por sus intereses encontrados y acorralado por su ineptitud.

A mediados de enero de 1976 cuatro ministros son alejados de sus cargos. Se los reemplaza por figuras provenientes de diversas áreas del peronismo. Se dice que la nueva combinación ha sido manipuleada por el yerno de López Rega, Raúl Lastiri, quien en esos días condesciende a un reportaje en la revista *Gente* luciendo su colección de corbatas y la chillona decoración de su residencia.

Lorenzo Miguel no oculta su disgusto por el nuevo ministerio y Casildo Herreras rezonga, en declaraciones públicas, sobre "el entorno" que alejaría a la Presidenta de los dirigentes gremiales. A principios de febrero, nuevos cambios en el gabinete: renuncia el ministro de Economía, Antonio Cafiero, y también el de Trabajo –que se encontraba veraneando y había dicho que no regresaría a Buenos Aires sino después de la aceptación de su renuncia–. Emilio Mondelli, un banquero, es designado en la cartera económica y su primera declaración es realista: "No pido adhesiones –dice– sino una expectativa no combativa". Sin duda recordaba a su predecesor, aclamado al principio por la cúpula sindical y luego saboteado hasta obligarlo a dimitir. En ese momento, el dinero argentino virtualmente no existía: se compraba y vendía en dólares; todo peso que pudiera sobrar se invertía en adquirir divisas y los que no podían hacerlo acumulaban mercaderías, aun las más innecesarias, urgidos por la sensación de que el poder adquisitivo de la moneda nacional se evaporaba en las manos. Terminaba el mes de enero con más de 50 muertos por la violencia, sin incluir los cómputos de Tucumán.

Mondelli habló clara y sinceramente: si no había cooperación por parte del movimiento sindical, la economía entraba en un tirabuzón definitivo. Finalmente los gremialistas aceptaron un plan que incluía negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora era el empresariado el que manifestaba su protesta. El 16 de febrero ocurrió un hecho insólito: un *lock out* organizado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, nucleamiento formado al margen de la conducción de la CGE, que logró paralizar en buena medida las

actividades del país. Renunció el presidente de la CGE y las "62 Organizaciones" denunciaron a los empresarios, que pretenderían *"vender* un cuadro de situación más dramático que el vivido y sufrido por las fuerzas del trabajo". Calificaban el paro empresario como "golpista" y aseguraban que el gobierno de la Nación "está en las más perfectas manos".

No opinaba lo mismo un partido que había sido aliado del peronismo e integrante hasta diciembre del FREJULI. El Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, publicó a fines de febrero un diagnóstico preciso: "El país se ha empobrecido, la recesión ha comenzado a profundizarse día a día, a despecho de la emisión galopante y de la fiebre de consumo que se apodera de un pueblo consciente del diario envilecimiento monetario. Las industrias básicas (...) aumentan día a día sus capacidades ociosas. Las actividades económicas (...) duplican la tasa de descapitalización que afecta a todos los sectores sin excepción. El país se encuentra virtualmente al borde de la destrucción del sistema monetario..."

El Poder Ejecutivo parecía seguir viviendo en el limbo. El 13 de febrero se dio a conocer un decreto que declaraba prioritaria sobre las elecciones para la renovación de autoridades, la reunión de una Convención Constituyente. ¡Una convención para reformar la Constitución, cuando todo estaba prendido con alfileres! Cinco días más tarde, María Estela Martínez anuncia que ejercerá su mandato hasta el fin del período pero que no desea ser reelegida. En el Congreso, que no se había reunido en todo el verano pese a encontrarse —teóricamente— en sesiones extraordinarias, se habla abiertamente de formular juicio

político a la Presidenta, por ineptitud —para no mencionar el problema de los fondos de la "Cruzada", que estaba investigando una comisión especial—. Pero a fines de ese mes, la Cámara de Diputados rechazará, con el voto peronista, un proyecto de juicio político presentado por la Fuerza Federalista Popular.

Finalmente, el 5 de marzo, el ministro de Economía anuncia su plan. Parece una reedición del "rodrigazo": devaluación del 22%, aumento salarial del 12%, aumento de la nafta en 77%, precios máximos para la canasta familiar con control policial, envío de una misión para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Nada nuevo, por supuesto: calafateos a un bote que hace agua por todos lados. Al día siguiente, el Partido Justicialista elige nuevas autoridades: María Estela Martínez, presidenta; vicepresidente el gobernador del Chaco, Deolindo Bittel. En esa oportunidad, María Estela Martínez discursea en el tono agresivo que entonces usó con frecuencia: "¡Les voy a dar con el hacha!" —chilla—. "Tengo que convertirme en la mujer del látigo..." Y afirma: "¡A mí no me *entorna* nadie! ¡Ni el propio Perón me pudo *entornar* en dieciocho años!"

Todos saben que son las últimas semanas. El 12 de marzo, movimientos ministeriales: el ministro de Defensa enroca a la cartera de Defensa por renuncia de su titular, y hay un nuevo ministro de Justicia. El 15 estalla una bomba en un automóvil ubicado cerca del Comando en Jefe del Ejército: un muerto y 29 heridos. El 16, discurso de Balbín por radio y TV: sus palabras no aportan ninguna solución y dejan un eco fatídico con la cita final de Almafuerte, "Todos los incurables tienen cura / cinco segundos antes de la muerte", aunque, piadosamente, el

jefe radical trueca la palabra "segundos" por "minutos". Al día siguiente, Luis Sobrino Aranda, diputado peronista de "Grupo de trabajo" renuncia a su banca porque el "proceso político argentino está agotado". Se realizan encuentros entre los dirigentes del peronismo y el radicalismo: convienen en convocar una "polipartidaria" para elaborar un programa común, pero todos saben que ya no hay tiempo. El 22, el industrial peronista Jorge Antonio dice: "Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto, estabilidad, bienvenidas sean..." El mismo día es asesinado en Buenos Aires Atilio Santillán, secretario general de la FOTIA. Y en Montevideo Casildo Herreras responde a la pregunta de un periodista: "Yo no sé nada. Me borré..."

El 23 de marzo el diario *La Opinión* calcula que los 90 días de Videla vencen ese día o el siguiente. A mediodía, en un reportaje radial, Francisco Manrique expresa: "Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto, al desalojo de una pandilla". Por la tarde, *La Razón* titula así su primera página: "Es inminente el final. Todo está dicho".

En la Casa Rosada finaliza a medianoche una larga reunión de gabinete. Lorenzo Miguel, que ha participado de ella, dice triunfalmente: "Juéguense por nosotros; ¡pagamos dos con diez!" Y Bittel agrega: "Esto hay que festejarlo con champaña. Todo se ha disipado". La Presidenta ha salido en helicóptero, rumbo a la residencia de Olivos, minutos después de las 0 horas. Es decir, cuando empieza el día 24 de marzo: noventa días exactos después de la alocución de Videla en Tucumán... Diez minutos después, deja de ser presidenta.

Fue el último golpe militar contra un gobierno constitucional. Pero los saldos del "Proceso" iniciado en 1976

tampoco pueden enorgullecer a sus protagonistas. En esta serie hemos visto que las Fuerzas Armadas derrocaron a los gobiernos civiles cediendo, en general, al reclamo de sectores de la ciudadanía. Hubo culpa en los derrocados tanto como en los golpistas. Y la reiteración de las intervenciones armadas impidió el ejercicio continuado de la democracia, ese sistema que, con todos sus defectos, es el único que puede corregir sus propias fallas. Porque la democracia necesita tiempo para florecer, y paciencia para superar sus imperfecciones...

XII

LA DEBILIDAD POLITICA DE LOS GOBIERNOS MILITARES

Lo que se ha venido leyendo define una evidencia ilevantable: salvo un caso, los gobiernos militares no lograron elaborar las salidas que hubieran deseado. Uriburu debió entregar el poder a Justo, que no era su candidato. Aramburu transfirió el mando a Frondizi, que tampoco lo era. Illia no constituía la mejor salida para los "azules" que estaban detrás del gobierno de Guido. Y obviamente, la asunción de Cámpora materializó la derrota de Lanusse o mejor dicho, de Onganía, Levingston y Lanusse. En la actualidad, según van las cosas, Videla, Viola y Galtieri se habrían sentido tan desdichados como Bignone cuando éste deba ceñir la banda y entregar el bastón a cualquiera de los postulantes civiles en danza hacia la futura presidencia. Sólo un gobierno *de facto*, repetimos, logró una salida satisfactoria consigo mismo: el de 1943/46, pero esta excepción confirma la regla, y las circunstancias de la época, por irrepetibles, destacan la singularidad del caso protagonizado por Perón.

La debilidad militar

¿A qué se debe esta debilidad de los gobiernos militares para generar salidas políticas? Seguramente al desgaste que, en el ejercicio del gobierno, evapora su primitiva virtud.

Los gobiernos militares, ya lo hemos visto, se instalan generalmente como un remedio drástico y último a situaciones real o aparentemente insostenibles. Llegan rodeados de un generalizado auspicio, "llevando en brazos a la más bella de sus hijas, la Esperanza", como dijera el filósofo español Balmes. Esta expectativa puede satisfacerse en una primera etapa, cuando el orden, la disciplina, la limpia sobriedad de la espada se imponen sobre el caos o la ineficiencia anteriores. Las medidas inaugurales de saneamiento y las sanciones contra los responsables —verdaderos o supuestos— de la anterior situación, satisfacen a la opinión pública y reciclan, aumentándolas, las expectativas iniciales. ¡Ahora sí, todo va a andar bien!

Pero después de esto, hay que gobernar. Tomar decisiones, pensar serenamente los pro y los contra, impedir que se vulnere el delicado equilibrio de los intereses, considerar la trascendencia de cada medida, optar, elegir. Y aquí empiezan los tironeos. Los militares, en razón de su profesión, conocen bien al país y a su pueblo, pero lo conocen horizontalmente, no en profundidad. No tienen contacto con los intrincados mecanismos que hacen caminar al país, y si llegan a conocerlos, les impacienta su complejidad. Porque los hombres de armas están formados para la simplicidad: bueno y malo, permitido y prohibido, correcto e incorrecto, mando y obediencia. En su vida no hay grises: todo es blanco o negro, y así tiene que ser en el orden castrense.

Pero ya se sabe, una visión simple de cosas complejas suele aparejar decisiones equivocadas. Y la vida, la vida civil, está llena de matices, de cosas que no son decididamente buenas ni decididamente malas. A lo cual debe agregarse otra dificultad: el espacio cada vez mayor que

ocupa en la vida contemporánea el tema económico y sus secuelas, un tema que inspira un temor reverencial a los militares. Eso... ¡que lo manejen los técnicos! ¿Quién se acuerda de los inspiradores de la política económica de Uriburu en 1930/32, o de Ramírez y Farrell en 1943/46? ¿Los hubo, acaso? Pero en 1955 aparece Prebisch, en 1962 Pinedo, en 1966 Krieger Vasena, en 1976 Martínez de Hoz... Los militares en el poder se reservan los aspectos en que se creen competentes, pero la economía queda siempre a cargo de los que saben, y éstos, muchas veces, tienen mayor poder que los titulares formales, y sus compromisos ideológicos y económicos no siempre coinciden con los intereses del país.

Todo esto ocurre porque los soldados carecen de ideología, como no puede ser de otra manera. Se suele hablar del "partido militar", pero los militares no constituyen un partido puesto que no tienen un programa único ni un paquete de ideas por todos compartido. Están uniformados, pero sólo en lo externo, la indumentaria, el protocolo, la jerga profesional; en realidad, carecen de uniformidad en las ideas, pues no están formados para elaborar o compartir ideas sino para cumplir una función técnica. El patriotismo no alcanza para gobernar: es un espléndido sentimiento que los hombres de armas cultivan y estimulan, pero el más acendrado patriotismo es incapaz de indicar el correcto tipo de cambio, la conveniencia o inconveniencia de elevar una tarifa aduanera o la urgencia de construir un dique.

El natural desgaste

Así se va desgastando el régimen que empezó saludado por tantas esperanzas. Empiezan las equivocaciones, y como el criterio prevaleciente en la estructura militar es el de autoridad, se insiste en el error para no desautorizarse. Se profundiza entonces el aislamiento; las hostilidades opositoras son contestadas con excesos, verbales o de hecho. El deterioro se profundiza, empiezan las incoherencias, menudean los relevos, las marchas y las contramarchas. Y un buen día, ese gobierno *de facto* que miraba delante de sí un tiempo casi infinito, una larga perspectiva para ir preparando sin apuro la concreción definitiva y estable de sus objetivos, encuentra que se le han agotado los años y meses que le fueron dados. Que hay que salir del embrollo de cualquier manera, con cualquiera, para evitar lo peor.

Esta es, a grandes rasgos, la explicación de la debilidad de los gobiernos militares para generar salidas políticas aceptables. Pero del material que se ha leído también surge otra evidencia: que los gobiernos *de facto* no surgieron por el capricho de los militares. Estos salieron a la calle impulsados por los civiles: por un sector de ellos o por un difuso estado de la opinión pública que impulsó a los hombres de armas a tomar el poder. La responsabilidad de los sucesivos *factos* que se han reiterado en nuestra historia reciente debe compartirse, pues, por mitades, entre la civilidad y la milicia. Y todavía hay que agregar esto: hubo situaciones que pudieron solucionarse dentro de los mecanismos constitucionales y no lo fueron, por indecisión o falta de agallas de la dirigencia de turno. Si a mediados de 1955 los importantes del peronismo hu-

bieran instado a su líder a terminar con los ataques a la Iglesia y a afrontar una apertura de libertades de la oposición, tal vez Perón no hubiera caído; como no se hubiera derrocado a su viuda si en 1976 se la hubiera persuadido a facilitar una solución constitucional que implicara el retiro de su persona.

Así, pues, los partidos políticos también son responsables del debilitamiento de un sistema que en nuestro país es particularmente vulnerable porque no se le dio oportunidad de superar dificultades a través de sus propios sistemas de corrección. Lo fácil fue siempre llamar a los militares para que solucionaran situaciones políticas que se habían tornado aparentemente insolubles. Y de esto, todos somos culpables. Hagamos un examen de conciencia: ¿no nos hemos alegrado, aunque sólo fuera una vez, de la caída de algún presidente? Cuando todos, en algún momento, vieron con regocijo el advenimiento de un *facto*, quiere decir que nuestra democracia ha estado gravemente enferma. Digo "ha estado" porque acaricio la esperanza de que ahora quede cerrado para siempre el ciclo azaroso de los gobiernos *de facto* llamados por sectores civiles, que desembocan en salidas artificiales o débiles, lo cual es causa de que a la vuelta de un tiempo otros sectores civiles vuelvan a clamar por la solución militar... ¡y a empezar de vuelta!

Esto debe terminar.

Fallas y desajustes de nuestra democracia

La triste calesita de golpes militares seguidos por gobiernos civiles que, por una u otra razón, vuelven a ser

víctimas de otros golpes militares, expresa los desajustes y fallas en una democracia que rara vez fue plena desde 1930. Antes de este año, a partir de la Ley Sáenz Peña, existió una democracia aceptable, pero se trataba de un país simple, manejable, con un papel muy definido dentro del sistema vigente en el mundo, es decir, sin grandes conflictos internos. Desde 1930, a medida que la Argentina se fue haciendo más compleja y en tanto se acentuaban sus contradicciones y se hacía borrosa su ubicación internacional, la democracia entra en crisis. A lo largo de la década del 30 se mantienen sus formas pero en los hechos gobierna una minoría que usa el fraude electoral tantas veces cuantas sean necesarias para evitar su desplazamiento.

Después de 1945 se instrumenta una democracia de masas a la que falta un elemento esencial: el respeto por las minorías, pues no puede ser democrático un sistema que, pese a contar con la adhesión popular, ve en la oposición un grupo marginal indigno de recibir el pan y la sal. Posteriormente a 1955, la democracia que se intentó reconstruir adolecía de una grave falla: la proscripción o exclusión del peronismo, cuyos eventuales triunfos electorales provocaban automáticamente la caída del gobierno, fuera Frondizi o Illia su titular. Finalmente, cuando se levantó la excomunión que pesaba sobre el peronismo y éste triunfó en 1973, su propia naturaleza hizo imposible una administración medianamente ordenada, y el caos y la violencia, más que el golpe militar, lo arrasaron.

No es éste un recuento alentador, pero es imposible eludirlo. En compensación, hay que señalar que nuestro país cuenta orgánicamente con todas las condiciones ne-

cesarias para hacer viable una democracia sólida y estable: una tradición de libertad, una estructura social que no presenta desigualdades irritantes, una vocación de recíproco respeto, reprobación de la violencia, fuerzas políticas experimentadas. Además, los reiterados fracasos de los *factos* que llegaron, uno después de otro, con el propósito ilusorio de enderezarlo todo, sirven como activante para una buena reconstrucción: ya nadie cree en soluciones mágicas ni en hombres providenciales. Los *slogans* pretenciosos han caducado y a medida que el país evidencia su retroceso y su empobrecimiento, empezamos a apreciar mejor ciertos valores elementales que hacen a la convivencia, por ejemplo, o a la seguridad personal. Y sobre todo, aquellos que ubican a las instituciones en su correcto papel, para impedir que las Fuerzas Armadas se atribuyan la facultad de gobernar; pero también que los sindicatos establezcan un sistema de vetos o imposiciones o que los órganos empresarios impongan políticas económicas determinadas.

Nuestra historia tiene un fondo de autoritarismo y arbitrariedad que viene desde sus lejanos orígenes hispánicos. Sólo por lapsos cortos hemos gozado los argentinos de tiempos donde se acepta el disenso, la crítica, el cuestionamiento, requisitos indispensables para mantener vivos y tensos los fundamentos de un sistema democrático. Por esto mismo debemos potenciar esta corta y valiosa tradición, que requiere tiempo para florecer y tolerancia para corregir sus propias fallas.

La vulnerabilidad del "facto"

Paradójicamente, pues, los gobiernos *de facto*, que dan una apariencia de solidez y fuerza, suelen ser muy vulnerables en dos aspectos fundamentales. Uno, ya lo dijimos, es su incapacidad para generar una sucesión propicia.

El otro flanco débil tiene que ver con sus relevos internos. Sucede que a lo largo del *facto* el desgaste, los errores o las necesidades políticas hacen conveniente la sustitución del equipo protagónico o, más concretamente, del presidente. Y para esto no hay regulaciones; y cuando las hay (caso de las famosas "Actas del Proceso") se violan, pues en un estado de hecho ni siquiera el derecho inventado para ser aplicado al *facto* puede prevalecer sobre la fuerza que constituye la esencia de su naturaleza. Entonces, cada relevo es un escándalo, un golpe de Estado, un episodio que atenta contra el orden, ese valor prolijamente cuidado por todo gobierno militar. La sustitución de Ramírez por Farrell en 1944; la de Lonardi por Aramburu en 1955; la de Onganía por Levingston en 1970 y la de éste por Lanusse en 1971; la de Videla por Viola, la de éste por Galtieri y la de Galtieri por Bignone, todos estos relevos han sido, indefectiblemente, sucesos críticos, escandalosos.

Los relevos de la democracia, realizados en períodos previstos por la ley tienen, por el contrario, el tono acompasado de la regularidad, y esta rutina permite absorber y asimilar hasta los cambios más grandes de los equipos y las ideas.

Esto es algo que merece profundizarse. La democracia no es una solución en sí. Es un marco, un requisito, den-

tro del cual el país puede evolucionar pacíficamente. Y en este mundo que nos toca vivir, con su dura competencia internacional y su carrera hacia mejores formas de vida, importa que exista una continuidad en el manejo de la Nación. Pero más que una continuidad de políticas u objetivos, una que tenga que ver con las reglas de juego de la comunidad. Esto es, precisamente, lo que ofrece la democracia: la seguridad de un libre y permanente debate sobre la problemática contemporánea, la posibilidad de que la minoría de hoy pueda convertirse mañana en mayoría, la garantía de que los actos de los gobernantes se sometan al veredicto de la opinión pública no sólo a través de elecciones periódicas sino mediante su examen por los canales habituales de expresión del espíritu colectivo.

Para que esto ocurra, se necesita una confianza previa en la clase política. Confiar en los políticos. Depositar en ellos, para el manejo del Estado, la misma credibilidad que se otorga al cirujano para operar o al contador para hacer números...

Confiar en los políticos

Hay que acostumbrarse, de una vez para siempre, a que quienes gobiernen deben ser los políticos. Esta es su vocación y a ello son llamados, así como los militares están destinados a defender la integridad nacional o los sindicalistas a cuidar los intereses de sus compañeros de gremio. No hay ningún exclusivismo en la idea de que sólo deben gobernar los políticos, porque éstos no forman un club cerrado ni una casta; cualquiera puede ser político si tiene la vocación suficiente y la paciencia necesaria para de-

sarrollar esta actividad; el éxito de su carrera no depende sino del apoyo que convoque y la resonancia de su personalidad y sus ideas.

En nuestro país, cada gobierno *de facto* abundó en denuestos contra los políticos, pero lo cierto es que éstos, en general, no han sido merecedores de críticas más fuertes que los animadores de las situaciones de hecho. Lo que es trágico, por cierto, es la falta de continuidad de la clase política, interrumpida en sus renovaciones naturales por cada *facto.* Una carrera pública debe tener un *cursus honorum* regular, pausado, que permita a los protagonistas asumir nuevas y más importantes responsabilidades a medida que aumenta su experiencia y que su nombre se vincula a esferas de poder más importantes; en la Argentina esta carrera suele cortarse abruptamente a la vuelta de pocos años. Los *factos* congelan la política, disuelven los partidos, hablan pestes de los dirigentes, y cuando recomienza el juego cívico no hay camadas nuevas que reemplacen las ya gastadas y entonces la inexperiencia conduce a errores e improvisaciones.

Confianza en los políticos, pues, pero sobre todo, confianza en la democracia, un sistema que sólo se perfecciona en la medida que se deje operar a sus propios mecanismos de corrección. Estas convicciones son las únicas que pueden terminar con el ciclo de los golpes militares. Para que estas confianzas se afirmen, hay que disponer de tiempo, pues sólo éste puede permitir la creación de equipos permanentes en las distintas colectividades cívicas que se alternen sin sobresaltos en el ejercicio del poder; sólo el tiempo puede desarrollar las regulaciones internas que eviten predominios avasallantes o situaciones de conflicto irreparable.

¿Tendremos los argentinos la necesaria paciencia para que el tiempo pueda operar sus mágicos y casi invisibles filtros? Es de esperar que las experiencias pasadas nos sirvan de lección. He aquí una Nación con un excepcional contenido humano, poseedora de estimulantes bienes culturales, dueña de todos los climas y todos los recursos naturales, exenta de problemas raciales, religiosos o regionales insuperables, ubicada en un punto del planeta que la aleja del ojo de las tormentas internacionales; y que, no obstante estos dones, todavía no ha encontrado la formulación política de su estabilidad y su convivencia. Esto es una aberración incomprensible que debe cancelarse para siempre.

Ahora estamos en vísperas de una nueva salida electoral que cerrará un *facto*. Debe ser la última. Tal vez es más difícil que todas las anteriores, y requerirá mucha sagacidad en los políticos y mucha humildad en los que se van. Y en todos, el propósito de dejar clausurado el triste ciclo de la inestabilidad. Si la historia sirve, como creo, para pensar el país, las evocaciones que se han hecho en estas páginas pueden ser útiles para indicar la senda que conduzca hacia la salida.

INDICE

Esta edición de 25.000 ejemplares,
se terminó de imprimir en
EDIGRAF S.A., Delgado 834,
Buenos Aires, Argentina,
en el mes de junio de 1983.

¿Por qué la democracia argentina, imperfecta pero lozana hacia 1930, fue degradándose en el último medio siglo? ¿Qué responsabilidad tuvieron en este desdichado proceso los militares? ¿Cuál fue el papel de los políticos y de la opinión pública en el naufragio del sistema que había enmarcado las primeras etapas de nuestra vida republicana?

Félix Luna contesta estos interrogantes haciendo el relato de los golpes asestados contra los gobiernos constitucionales desde 1930 y describiendo la manera en que el país salió de los regímenes *de facto* emergentes de los mismos. En el ágil y vivo estilo que le es habitual, profundiza las causas y consecuencias de las alternancias entre poderes constitucionales y de hecho, y señala las condiciones que deberán robustecer en el futuro el marco democrático que es indispensable para la realización pacífica de la comunidad nacional.